



UNA VENTANA  
A LA LIBERTAD

# INFORME DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN PREVENTIVA EN VENEZUELA

**AÑO 2019**



**UNAVENTANALALIBERTAD.ORG**

FEBRERO, 2020



DIRECTOR GENERAL  
**Carlos Nieto Palma**

COORDINADORA OPERATIVA  
**Carol Carrero Marrero**

COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN  
**Magaly Huggins Castañeda**

INVESTIGADORES  
**Giovanna Pellicani (Anzoátegui)**  
**Gregoria Díaz (Aragua)**  
**Pableysa Ostos (Bolívar)**  
**Rubén Bolívar (Carabobo)**  
**Angélica Lugo (Caracas)**  
**Eva Riera (Falcón)**  
**Pedro Izzo (Guárico)**  
**Héctor Rodríguez (Lara)**  
**Pola de Giudice Ortiz (Estado Miranda,**  
**Altos Mirandinos)**  
**Lidk Rodelo (Estado Miranda,**  
**Guarenas, Guatire y Barlovento)**  
**Rosanna Battistelli (Estado Miranda,**  
**Valles del Tuy)**  
**Elvis Rivas (Mérida)**  
**Jesymar Añez (Monagas)**  
**Mario Guillén (Nueva Esparta)**  
**Lorena Arráiz (Táchira)**  
**Nadeska Noriega (Estado Vargas)**  
**Jéssika Ferrer (Zulia)**

ASISTENTE A LA COORDINACIÓN  
DE INVESTIGACIÓN  
**Nohely Marin**

## **INFORME DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN PREVENTIVA EN VENEZUELA**

**AÑO 2019**



© UNA VENTANA A LA LIBERTAD 2020

COMUNICACIÓN VISUAL  
**Norelkis A. Riera Romero**  
**Grecia B. Almeida Serrano**



# CONTENIDO

Pág. 3  
**RESUMEN EJECUTIVO**

Pág. 12  
**PRESENTACIÓN**

Pág. 15  
**METODOLOGÍA**

Pág. 17  
**INTRODUCCIÓN**

Pág. 20  
**¡ALERTA VENEZUELA ALERTA!**

Pág. 27  
**MONITOREO**

Pág. 30  
**HACINAMIENTO**

Pág. 44  
**SALUD**

Pág. 56  
**MUERTE BAJO CUSTODIA EN LOS  
CENTROS DE DETECCIÓN  
PREVENTIVA**

Pág. 61  
**CONCLUSIONES Y  
RECOMENDACIONES**



# RESUMEN EJECUTIVO

A continuación presentamos el Informe Anual 2019, elaborado con la participación del equipo de investigadores de **UVAL** que durante el primer semestre fueron 13 y que para el segundo semestre fue ampliado a 17, lo cual incidió en la ampliación de la cobertura en el estado Miranda –tres investigadoras a cargo de las zonas de

1. Guarenas, Guatire y Barlovento;
2. Los Altos Mirandinos y
3. Los Valles del Tuy.

Una cuarta investigadora se hizo cargo del estado Vargas. En total 15 estados con una mayor cobertura y más información. Además tenemos un equipo de Coordinación de Investigación a cargo del diseño, instructivo y elaboración de los informes.

Indagar sobre las personas detenidas en los Centros de Detención Preventiva es una tarea compleja pues las fuentes oficiales no acceden a dar información ya que no está permitido. Esto no es exclusivo de nuestro trabajo sino que es una política de Estado no dar información oficial en ningún sector de la vida y sus conflictos, siendo más evidente en todo lo relacionado



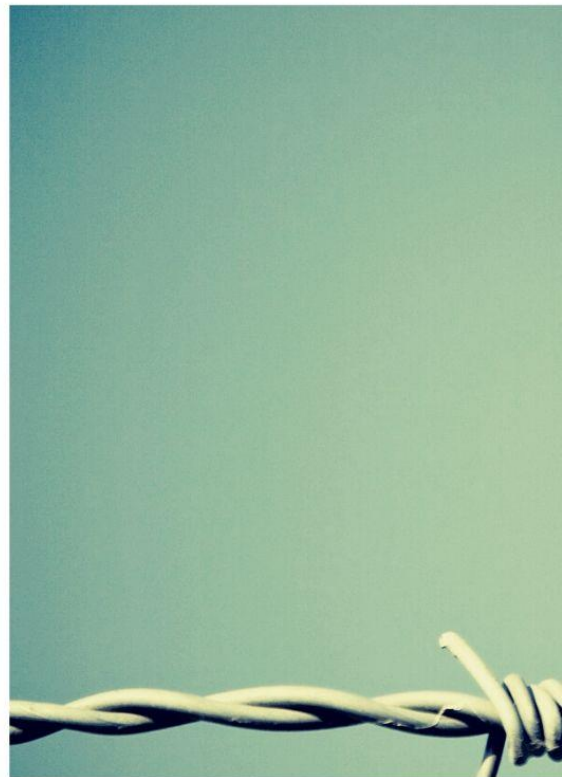


con violencia, violación de derechos humanos de personas bajo la custodia del Estado como es el nuestro, y salud entre otros. Cuando algún funcionario acepta dar alguna información, lo hace bajo su responsabilidad y, en algunos casos, tratando de conseguir alguna mejora en sus condiciones de trabajo.

El año 2019 presentó algunas situaciones particulares durante el primer semestre debido al aumento desproporcionado de las personas detenidas, en su mayoría durante el primer trimestre. Las protestas políticas pacíficas generaron una arremetida de las fuerzas policiales y la Guardia Nacional Bolivariana, las cuales detuvieron a manifestantes acusándolos muchas veces de vandalismo. Otros fueron detenidos por las protestas sociales debido a la carencia de productos de consumo masivo como alimentos y medicinas, los servicios básicos fundamentales como agua, luz, gas y otras, por los graves problemas salariales que impiden el acceso a productos básicos para la vida cotidiana. Este uso político de los calabozos o CDP es evidente al ver la reducción de detenidos y detenidas por estos motivos durante el segundo semestre.

Metodológicamente, continuamos mejorando los instrumentos y el instructivo para recoger la información, trabajando las tres dimensiones.

1. Salud, higiene y alimentación
2. Demografía e infraestructura, y
3. Sucesos e integridad personal.



Nuestras fuentes siguen siendo las y los familiares de los detenidos, algunos detenidos y algunos funcionarios, fundamentalmente. La información obtenida a través de dos técnicas de recolección, las cuales se complementan entre si hace más evidente en este informe al ver los resultados de los **Alertas** y del **Monitoreo**, lo cual enriquece nuestro análisis.

En este informe hacemos visible como el hacinamiento sigue siendo un grave problema que afecta la salud, calidad de vida y la vida de las personas detenidas en los calabozos. La reducción de casi el 50% de los detenidos durante el primer semestre no fue solución para estos centros de detención. Tampoco lo fueron las *Medidas de Agilización y Descongestionamiento* que por la presión nacional e internacional se realizaron, las cuales fueron más propaganda que resultados concretos, ya que sólo produjeron 121 detenidos trasladados a alguna cárcel o centro penitenciario.

Presentamos algunos datos que son más concretos en los **Alertas**, por su cotidianidad y seguimiento permanente en los estados cubiertos por el equipo de UVAL. Los más resaltantes son el número de fugados 358, de los cuales sólo encontramos 5 (1,4%) mujeres y 4 (1,1%) adolescentes entre 14 y 18 años. El 57% de las fugas fue durante el primer semestre. Sólo fueron recapturados 109 (30,4) de los fugados y 41 (11,5%)





murieron. Los datos nos evidencian que es un riesgo calculado ya que a mayor hacinamiento aumentan las fugas y la probabilidad de fracasar en el intento es menor que lograr la libertad.

En cuanto a los resultados del Monitoreo podemos señalar como lo más relevante, las siguientes informaciones que nos demuestran cómo se violentan los derechos humanos y de allí, las muertes bajo custodia son una consecuencia en muchos casos, inevitable.

Veamos un resumen de lo analizado a partir de los datos recogidos en el monitoreo, comenzando por el hacinamiento que es una constante en todos o casi todos los CDP. No existe uno que no albergue una cantidad mayor de la capacidad que tiene para los detenidos, sean hombres o mujeres. La capacidad para discapacitados y adolescentes entre 14 y 18 años es casi nula. Los estados con menos hacinamiento son Táchira, Lara y los Valles del Tuy del estado Miranda los cuales no llegan a duplicar su capacidad. Por el contrario en este orden los que registran un mayor hacinamiento son Anzoátegui, Aragua y Miranda en la zona de Guarenas, Guatire y Barlovento, los cuales van de más de 7 a más de 6 veces su capacidad.





El hacinamiento es un compañero constante de todas las otras violaciones de derechos fundamentales. Tanto es así que en 183 (91%) CDP es considerado uno de los principales riesgo de salud. Hablando de salud, las enfermedades infecto-contagiosas son las más frecuentes y la contaminación de las personas detenidas una constante, en particular las enfermedades de la piel como la sarna o escabiosis. Hubo para final del año 494 detenidos con este padecimiento, un 44,8% de las enfermedades reportadas. También un total de 224 enfermos de tuberculosis lo que significa el 20,3% de los detenidos y la mayor causa de muerte por enfermedades (22 reclusos). Un dato impactante es el alto número de personas detenidas que se encuentran desnutridas, lo cual se convierte en el elemento facilitador por disminución de las defensas y hace de ellos fáciles víctimas de cualquiera enfermedad, que luego será la registrada en su partida de defunción.

Las otras condiciones de riesgo a la salud que se identifican son la falta de saneamiento del CDP en 186 o sea el 93%, y por otro lado e íntimamente unido al hacinamiento, la mezcla de reclusos sanos con reclusos enfermos para un total de 160 CDP o sea, el 60%.

Toda esta situación de salud se agrava cuando vemos que el suministro de alimentos y medicamentos corre por parte de los familiares en 192 CDP en el primer caso a 189 en medicamentos. Esto nos lleva a preguntarnos por la suerte de los tantos detenidos y detenidas que son transferidos a estados lejos de sus familiares. Pero este suministro no es siempre libre o gratis. Las mujeres familiares -que son la mayoría- pagan vacuna para poder alimentar





a su familiar detenido. Esta información fue confirmada en 85 calabozos del total monitoreados. Imposible no preguntarnos el costo emocional, físico y económico que representa esta responsabilidad para familias de sectores populares en su mayoría, con muy bajos ingresos para costear la salud y alimentación de toda su familia. Sustituir en su responsabilidad al Ministerio para el Servicio Penitenciario, se convierte en un sacrificio para la mayoría de estas familias, que también son víctimas de la negligencia institucional.

Por último queremos señalar que son muy pocos los CDP con áreas separadas para mujeres y en particular para mujeres embarazadas, aun cuando muchas de ellas se embarazan dentro del calabozo y no reciben atención. En la mayoría de los calabozos sólo son llevadas al centro de salud más cercano para dar a luz, lo cual no ha evitado que algunas tengan el parto en el suelo del CDP. Acerca de la salud de las mujeres no embarazadas, no tenemos mucha información pero la que podemos disponer nos indica que no reciben ninguna atención especial sea cual sea la enfermedad que sufre, crónica como cáncer o quistes en los ovarios.

En nuestra segunda dimensión, *Demografía e infraestructura*, además de lo señalado de la no existencia de áreas separadas para mujeres y hombres, debemos resaltar que tampoco existen áreas para recreación, educación, visita del abogado, visitas de niños y niñas, etc. Y es aquí donde el hacinamiento se evidencia al contabilizar el número de detenidos y detenidas que se acumulan en los CDP monitoreados. No sabemos cuántos indígenas son



detenidos pues permanecen en su mayoría en calabozos en sus comunidades muy lejanas al centro de los estados. Tampoco podemos tener un dato acertado de la cantidad de personas de la comunidad LGBTI pues por problemas de seguridad personal de los mismos, esta información es retenida por los familiares.

El total de detenidos a finales del año, es otro elemento de esta dimensión que se vio afectado por la diferencia entre el número de detenidos durante el primer semestre y el segundo semestre, cuando ya habían sido liberados en una alta proporción los detenidos por las protestas, básicamente las políticas. Del total de detenidos para diciembre 2019 -19.091- según la información procesada, solamente sabemos que un 93,8% permanecen procesados y un 6,2% han sido sentenciados. Este dato no responde al total pues pocos CDP pudieron obtener la información.

Por último hablemos de la dimensión tercera del monitoreo *Sucesos e Integridad Personal*, la cual de alguna manera nos permite hacer una síntesis de todo lo trabajado en las dos dimensiones anteriores. Lo más importante y resaltante es el número de personas detenidas que han muerto bajo custodia del Estado. Tenemos un total de 172 personas fallecidas durante el año 2019, siendo la principal causa las enfermedades de diferentes tipos (46 o 24%) lo cual es vinculado al hacinamiento y mezcla de personas sanas con enfermas, tal cual señalaron los detenidos y sus familiares como una seria situación de riesgo en salud. Dentro de ellas la mayoría murió por tuberculosis. En segundo lugar tenemos la violencia entre reclusos (40 o 21%). Estas muertes están vinculadas no sólo al hacinamiento, sino a la






existencia de pranes y a la convivencia forzada de personas con diversidad de delitos como causa de detención y diferentes niveles de peligrosidad, de acuerdo a su historia personal. En tercer lugar aparecen las fugas (34 o 17,7%) y 16 (8%) por abuso de funcionarios, dentro del cual encontramos las torturas y malos tratos.

Todo lo dicho hasta ahora nos obliga a exigir que se cumplan las normas y leyes como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y las normas y acuerdos suscritos por nuestro país en torno a la situación de las personas detenidas o presas. La presión nacional e internacional debe continuar a fin de lograr que se cumpla con los ofrecimientos que realizara el Ministerio para el Servicio Penitenciario y que cumpliría en su primer año de existencia, y aún esperamos por ellos.

Sobrevivir, que no vivir, en un CDP es cada día más difícil. Estar detenido o detenida en estos calabozos es una tortura en sí misma, dadas las condiciones en que se desenvuelve la vida cotidiana. Pocas excepciones podrán existir, pero ninguno cumple con las normas y principios establecidos por la Organización de Naciones Unidas hace ya muchos años.

Nuestro compromiso es y será seguir haciendo visible esta terrible realidad, exigiendo que los Centros de Detención Preventiva dejen de ser utilizados como prisiones en Venezuela. Seguiremos siendo voz de los que no sólo no la tienen sino que además nadie quiere escuchar, en el ente responsable de su desempeño y cumplimiento normativo de manera que se garantice que perder la libertad y pasar



a la custodia del Estado, no tiene que ser una lucha cotidiana por sobrevivir.

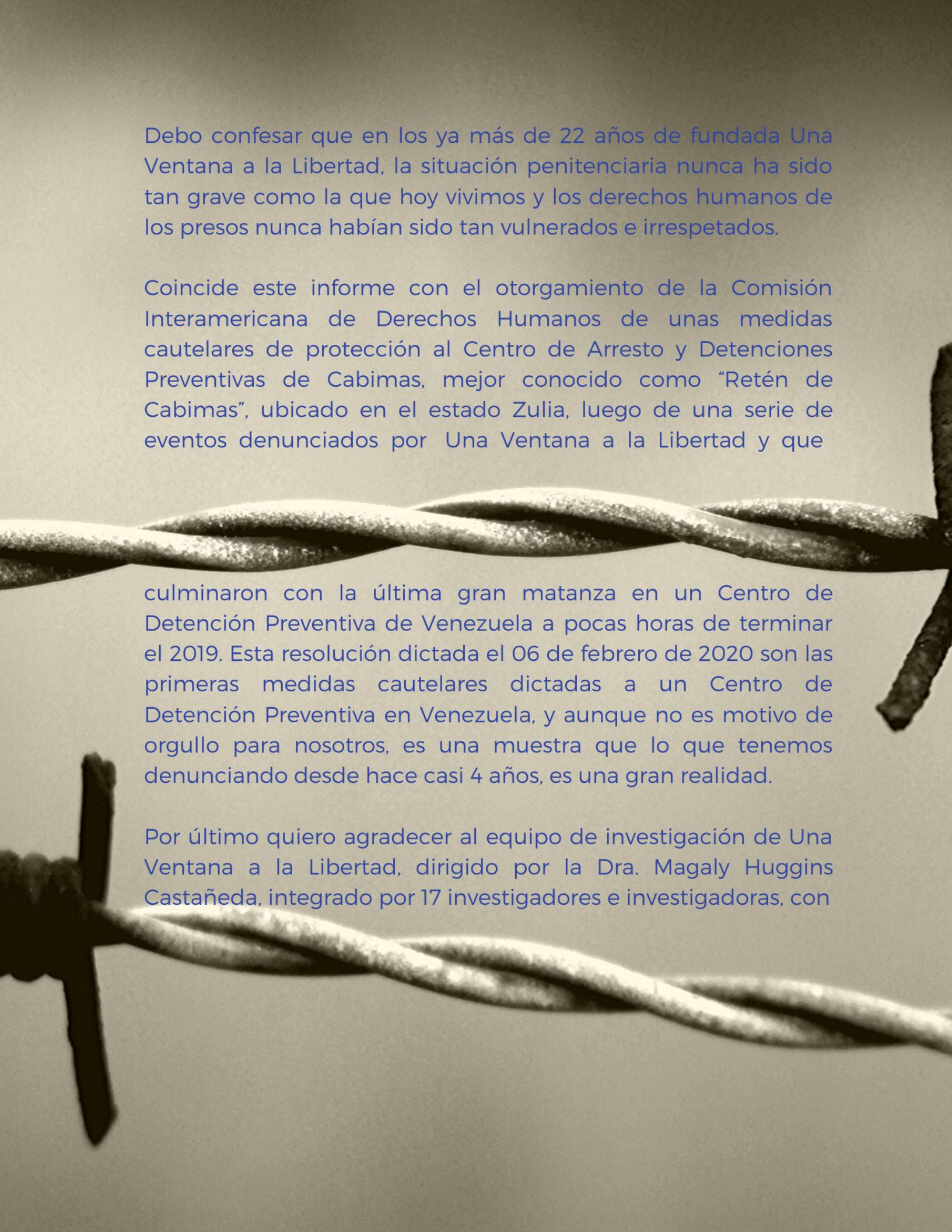


# PRESENTACIÓN

Me cuesta mucho hacer la presentación de este Informe Anual del año 2019 sobre la Situación de los Hombres y Mujeres Privadas de Libertad en los Centro de Detención Preventiva de Venezuela, por muchas razones, es el tercer informe anual que Una Ventana a la Libertad presenta sobre este grave problema que vivimos en Venezuela y lamentablemente en vez de solucionarlo ha empeorado cada día más, cuando lean el informe me entenderán lo que quiero decir.

Ya son casi 4 años monitoreando la situación de estos centros, originalmente creados para tener a privados de libertad por lapsos no mayores de 48 horas, pero que lamentablemente se han convertido en las nuevas cárceles venezolanas. Espacios donde el hacinamiento, la desnutrición, enfermedades de todo tipo y sin ningún tipo de atención, así como un retardo procesal que ronda por el 70%, son sólo algunos, de las muchas verdades que este informe les contara.





Debo confesar que en los ya más de 22 años de fundada Una Ventana a la Libertad, la situación penitenciaria nunca ha sido tan grave como la que hoy vivimos y los derechos humanos de los presos nunca habían sido tan vulnerados e irrespetados.

Coincide este informe con el otorgamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de unas medidas cautelares de protección al Centro de Arresto y Detenciones Preventivas de Cabimas, mejor conocido como “Retén de Cabimas”, ubicado en el estado Zulia, luego de una serie de eventos denunciados por Una Ventana a la Libertad y que

culminaron con la última gran matanza en un Centro de Detención Preventiva de Venezuela a pocas horas de terminar el 2019. Esta resolución dictada el 06 de febrero de 2020 son las primeras medidas cautelares dictadas a un Centro de Detención Preventiva en Venezuela, y aunque no es motivo de orgullo para nosotros, es una muestra que lo que tenemos denunciando desde hace casi 4 años, es una gran realidad.

Por último quiero agradecer al equipo de investigación de Una Ventana a la Libertad, dirigido por la Dra. Magaly Huggins Castañeda, integrado por 17 investigadores e investigadoras, con



los que hasta ahora hemos logrado cubrir 15 estados del país.

Doy fe de la rigurosa metodología que emplean, de lo difícil de su trabajo en un país que se niega a dar información oficial.

También tengo que agradecer a todo el equipo de Una Ventana a la Libertad que están en otras áreas pero que su apoyo es primordial para que este trabajo sea una realidad.

Espero les guste el trabajo hecho, aun y lo terrible de los resultados, fue un gran esfuerzo para todos, además creo que

estos datos serán de gran utilidad para cuando seamos un país libre y en la búsqueda de solucionar todo lo malo que hemos vivido.

Finalizo dándoles gracias a nuestros lectores por creer en nuestro trabajo, desde Una Ventana a la Libertad, les agradecemos su confianza, tengo la seguridad que en un tiempo cercano podremos decirles, en otros informes, que el horror que hoy se vive en los Centros de Detención Preventiva está cambiando.

Solidariamente,

Carlos Alberto Nieto Palma  
Coordinador General  
Una Ventana a la Libertad

# METODOLOGÍA

A mediados del año presentamos la metodología que seguiríamos en el monitoreo correspondiente al segundo semestre del año 2019, a fin de preparar el informe de final del año. Las matrices fueron nuevamente revisadas y también el instructivo a partir de la evaluación del trabajo del primer semestre. Se tomaron en cuenta las observaciones que los y las investigadore/as que recogen la información *in situ* y elaboran los **Alertas**, tuvieron a bien realizar después de monitorear los CDP. Queremos ratificar que la actualización metodológica se mantendrá hasta lograr que tanto las matrices como el instructivo sean fácilmente utilizados por el equipo de investigación, y así nuestro análisis esté cada vez más acertado y sea réplica exacta de lo que está sucediendo en los Centro de Detención Preventiva o calabozos en Venezuela.

Este segundo semestre se introdujo un cambio muy importante. Se incorporaron cuatro investigadoras al equipo de trabajo de campo: de los 13 del primer semestre trabajaron 17 en el segundo. Al incorporar nuevas investigadoras se produjeron variaciones en la cobertura en algunos de los **15 estados** del país: Aragua, Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital o Área Metropolitana de Caracas<sup>1</sup>, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Vargas y Zulia. Se incorporó de manera independiente al estado Vargas con una investigadora a cargo, y se dividió al estado Miranda en 3 sectores cada uno con una investigadora responsable: los Altos Mirandinos, el eje Guarenas-

---

<sup>1</sup> El Distrito Capital incluye a los Municipios Chacao, Baruta y El Hatillo del estado Miranda, los cuales forman el Distrito Metropolitano de Caracas.



Guatire y el sector de Los Valles del Tuy. Junto con el estado Vargas suman 30 nuevos CDP en esta etapa del monitoreo. Otros CDP se agregaron en los estados que ya se cubrían lo cual nos llevó a un total de 239 calabozos.

Como es de esperar, lo anterior introdujo algunos elementos que metodológicamente produjeron cambios en el análisis de la información. Por ello haremos en algunos casos una comparación entre los dos semestres a fin de visibilizar los cambios habidos entre ellos.



# INTRODUCCIÓN

Concluyó el año 2019 y los pocos cambios que se pudieron identificar en Venezuela en relación con los derechos humanos de quienes vivimos en este país, fueron de un retroceso continuo que culminó profundizando la ya conocida *emergencia humanitaria compleja*, que venimos padeciendo durante los últimos años y que poco a poco amenaza con convertirse en *tragedia*.

La falta de una institucionalidad gubernamental dirigida a resolver los problemas de la vida cotidiana de la ciudadanía, ha hecho cada vez más profunda la violación al derecho a la vida en general y a una vida digna de ser vivida, para quienes aún sobrevivimos en el país. La estrategia política ha girado en torno a no reconocer la escasez de todo lo necesario y/o urgente, convirtiendo a la población en menos ciudadanos y más sobrevivientes. La carencia cada vez mayor de alimentos y medicamentos y el no acceso a los centros de salud pública, debido a la incapacidad de darle atención a la población enferma por el cierre progresivo de sus dependencias (quirófanos, salas de emergencia, diálisis entre otros), por falta de mantenimiento de las máquinas o por contaminación de sus espacios, se agravó con la ya insostenible crisis de los servicios públicos. Sin agua potable y sin energía eléctrica y con una deficiente recolección de basura, estos centros se han convertido en lugares insanos altamente contaminados, entre otros problemas. En general la mayoría de la población de menores recursos del país está literalmente *muriendo de mengua*, expresión popular que significa esperar la muerte resignado/a, por no tener acceso a nada que pueda ayudarte a sobrevivir.





Esta es una de las razones fundamentales de la diáspora o huida del país de más de cinco millones de venezolanos, que buscan una sobrevivencia más digna en otras tierras. La desnutrición infantil y las altas cifras de mortalidad pre-postnatal y materna, aunadas a la mortalidad por falta de atención a las enfermedades crónicas, disminuyen la posibilidad de vida de muchas y muchos venezolanos, en particular niñas y niños, adolescentes, mujeres en edad productiva y las personas de la tercera edad. Unido a estos, la violencia sin control librada a la impunidad va acabando con la vida de los adolescentes y hombres jóvenes y adultos. Es decir, toda la población de Venezuela se ha convertido mayoritariamente en una población en riesgo, es decir, *vulnerable*.


Lo dicho hasta aquí nos lleva a preguntarnos sobre la situación de una población definida de sí como *vulnerable*: aquellas personas detenidas o presas, privadas de libertad que están bajo la responsabilidad absoluta del Estado venezolano, según el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 43. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. *El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad*, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma<sup>2</sup>.

Por último, en trabajos anteriores señalamos que en Venezuela se vive un genocidio a cuentagotas como califica el Dr. Zaffaroni la realidad latinoamericana. Ciertamente, pero hay que insistir sobre esto porque cada día se profundiza más la crisis en nuestro país, razón por la cual no existen cifras oficiales. El gobierno repite constantemente

---

<sup>2</sup> Cursivas nuestras.



que la crisis no existe y, cuando la acepta, le asigna la responsabilidad a las sanciones internacionales olvidando que estas son individuales en su inmensa mayoría y contra personas del régimen o vinculadas a él. Estas sanciones buscan ayudar a reconstruir el *Estado de derecho democrático*. Sin embargo, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil demuestra la realidad de manera irrefutable: en Venezuela vivimos hace años un genocidio por goteo y la sumatoria de estas víctimas sobrepasan las de países que viven situaciones de guerra o desastres naturales.

# ¡ALERTA VENEZUELA, ALERTA!

Como es sabido uno de los instrumentos que utilizamos en UVAL para el seguimiento de la situación de las personas privadas de libertad son los ALERTAS, elaborados permanentemente –casi a diario- por nuestro equipo de investigación<sup>3</sup>. Una tarea de atención y divulgación de información sobre los hechos que suceden día a día en los calabozos y en las prisiones venezolanas.

Como señalamos en nuestro informe del 1º semestre de 2019, los calabozos fueron un recurso sumamente importante para las políticas de represión de las manifestaciones públicas pacíficas -en su gran mayoría- por motivos políticos y demandas sociales; olvidando que esto último es un derecho establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 68:

Artículo 68. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.

Los Alertas arrojan información muy importante que no siempre puede luego ser confirmada por el monitoreo. Esto se debe básicamente a que las personas entrevistadas en el segundo –detenidos, familiares de los mismos, personal de custodia entre otros- no tienen acceso a la información global de los CDP. Cuando revisamos el total de detenidos en los Alertas del primer semestre sólo por participar en manifestaciones o protestas, éste ascendía a 583. Recordemos que durante este período se desarrollaron masivas manifestaciones políticas en apoyo a la oposición venezolana y a la Asamblea Nacional o parlamento venezolano. La mayoría hombres jóvenes adultos -91%-; en segundo lugar adolescentes menores de 18 años 6% y,

---

<sup>3</sup> Es oportuno recordar que en los Alertas se incluyen algunos estados en los cuales no tenemos presencia pero cuya información se hace pública.



en tercer lugar mujeres -3,4%- algunas de ellas menores de 18 años. También llama la atención observar que de los 583 detenidos por manifestaciones durante el primer semestre, 151 fueron acusados de vandalismo, es decir el 26% del total. Esto último fue particularmente llamativo en Anzoátegui y Caracas, en donde todos o casi todos los detenidos en las manifestaciones, fueron acusados inicialmente de vandalismo.

Muchas de estas personas quedaron luego en libertad, y el número de manifestaciones y la cantidad de participantes detenidos disminuyó en el segundo semestre, lo cual se hace evidente cuando vemos que en los datos de los Alertas que se refieren a personas detenidas por participar en estas acciones de calle sólo aumenta en 10 detenidos.

## Datos más resaltantes de los alertas 2019



**358** Reclusos fugados

**109** Reclusos re-capturados

**442** Encarcelamiento político

**146** Detención y acusados  
de vandalismo

**1047** Agilización y descongestionamiento  
(detenidos beneficiados)

**273** Reclusos beneficiados  
en jornadas de salud

**121** Traslados de reclusos  
a cárceles

**140** Protestas: Reclusos  
en huelga de hambre

**59** Protestas: Reclusos  
implicados en motines

**22** Muertos por Tuberculosis

**1176** Capacidad de los CDP

**6151** Reclusos albergados

**88** Tortura y maltrato  
hacia Reclusas

**141** Tortura y maltrato  
hacia reclusos



[unaventanaalalibertad.org](http://unaventanaalalibertad.org)



En la integración de los Alertas de todo el año 2019, es importante la cantidad de fugados que se registraron. Durante el año se fugaron 358 detenidos en los estados monitoreados por UVAL, 5 de ellos mujeres y 4 adolescentes menores de 18 años. De ellos 41 murieron por o durante la fuga (11%) y resultaron heridos 2 detenidos. Del total, 204 es decir el 57% fueron detenidos durante el primer semestre. Esto nos lleva a pensar que mientras aumenta el movimiento de ingresos y el hacinamiento también lo hace el número de fugados, algunos de ellos con ayuda de funcionarios o visitantes y algunas mujeres. Además, durante el año de acuerdo a la información de los Alertas fueron recapturados sólo 109 de los fugados, lo cual significa el 30,4% del total. En conclusión, la fuga rinde beneficios a los que la logran consumir lo cual se torna en un estímulo a seguirlo intentando.

Una información que resaltó durante el año 2019 en los Alertas fue el hacinamiento, lo cual está directamente vinculado a las protestas del primer semestre. Al integrar los dos semestres, el total de personas detenidas fue de 6.151, cuando la capacidad total era de 1.176; es decir 6 veces la cantidad de cupos. ¿Cuántos de estos detenidos fueron liberados y cuántos de ellos permanecían a finales del año? no podemos saberlo por falta de información oficial.

Otra información importante en los Alertas del año 2019 es la relativa a las medidas institucionales no planificadas con anterioridad, que fueron realizadas por el Ministerio de Servicios Penitenciarios como respuesta a las presiones que se derivaron de los informes sobre los derechos humanos de los detenidos en los CDP en el país. Lo más llamativo es que si bien 1.047 detenidos participaron de alguna manera en actividades de Agilización y descongestionamiento, sólo 5 (0,5%) recibieron medidas cautelares y 121 (11,6%) fueron trasladados a cárceles o prisiones. Al menos, numéricamente estas medidas institucionales no fueron muy exitosas, más allá de la publicidad que recibieron. También se realizaron jornadas de salud, con las cuales se beneficiaron solamente 273 detenidos.

Los Alertas durante el año 2019, nos reportaron un total de 86 detenidos muertos por diferentes causas. Lo más impactante es que de ellos 46 -el 53%- muere por enfermedades tratables y de ellos 22 o sea el 48% muere por tuberculosis. La otra causa de muerte reseñada fue por violencia entre los detenidos, 20 de ellos -23%- lo cual nos remite a la situación de violencia que además de estar vinculada al hacinamiento, también se vincula a la violencia de parte de los funcionarios.

Así, resalta en los Alertas del año 2019 sobre los CDP, el número de casos de tortura contra reclusas y reclusos. Este tema es muy importante debido a que en las entrevistas del monitoreo los detenido y detenidas, sus familiares y el personal que colabora con nuestros investigadores, poco hablan de ello. Durante el año se conoció de 229 casos de tortura y malos tratos a detenidos de los cuales 59 -26%- ocurrieron durante el primer semestre. De los 229, 88 es decir 38,4% fue cometido contra mujeres detenidas en los calabozos y 141 – 61,6%- contra hombres. Este dato es patético por el alto número de mujeres torturadas, si tomamos en cuenta que el total de detenidas sólo asciende a un 6,7%. Y esto no es un simple problema numérico: del total de mujeres detenidas –el 7% del total de detenidos durante el año- en los calabozos monitoreados, el 6,8% fueron víctimas de torturas o malos tratos; mientras sólo el 0,8% de los hombres detenidos fueron sometidos al mismo trato, cuando los hombres constituyen el 93% del total. No estamos haciendo comparaciones en función de quienes pueden ser torturados y quienes no, porque pensamos y estamos de acuerdo con la normativa nacional e internacional de que nadie debe ser sometido a torturas o malos tratos. Pero si queremos llamar la atención sobre este punto el cual exige una revisión y seguimiento, ya que este dato de 88 mujeres sometidas a torturas o malos tratos, puede estar tapando mucha violencia, entre otras, violencia sexual.

Se conoció de 6 detenidos muertos por tortura (3%). De los detenidos sometidos a maltratos o torturas el 50% lo fue a celdas de castigo y el 23% a aislamiento. Es decir, en los CDP no hay espacio para mejorar la distribución de las y los detenidos,



pero si lo hay para tener celdas de aislamiento y celdas de castigo. Solamente se reportaron 2 casos de abuso sexual, sin identificar si la víctima era hombre, mujer, LGBTI o adolescente.

Una información adicional que obtuvimos este año, fue la cantidad de Alertas referidas a centros penitenciarios. A pesar de que nuestro tema central son los calabozos o Centros de Detención Preventiva, toda información sobre la situación de las personas detenidas o presas en el país es importante de visibilizar. Nuestro equipo de investigación pudo registrar que durante el año 2019, 32 reclusos se fugaron de los centros penitenciarios; sólo 9 detenidos por manifestaciones fueron transferidos a alguno de estos centros y 40 reclusos fallecieron por diferentes enfermedades, 22 de ellos por tuberculosis.

Un hecho de suma importancia fue referido por un Alerta de UVAL del estado Zulia. Un hecho de violencia que comenzó el 22 de diciembre y detonó el 30 del mismo mes. Un evento que produjo 10 muertos y 6 heridos. La situación fue tan demoledora que los mismos reclusos que no se vieron inmiscuidos en el motín y enfrentamientos y sus familiares, “temen otra confrontación en cualquier momento”, entre los reclusos del CDP llamado Retén de Cabimas.

“Aún hay tensión. Los muertos no aplacan la situación. Hacen que el próximo atentado sea más feroz”, comentó un interno<sup>4</sup>.

Lo terrible de lo vivido en la situación anterior llevó al Coordinador de Una Ventana a la Libertad a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medidas cautelares para la protección de las personas detenidas en el Retén de Cabimas.

Para concluir esta parte de nuestro informe, queremos insistir en que las instituciones de detención han sido utilizadas de acuerdo a las necesidades políticas del momento con criterios no necesariamente institucionales, lo cual se evidenció de manera incuestionable durante el primer semestre del año 2019 con el alto número

---

<sup>4</sup> Texto elaborado por la investigadora del Zulia

de detenidos en los diferentes CDP. Asimismo, las acciones que se tomaron en beneficio de las personas detenidas fueron medidas ocasionales que, si bien pueden beneficiar a algunas personas detenidas –hombres, mujeres y jóvenes entre 14 y 18 años- no son soluciones reales a los problemas y, únicamente, evidencian la falta de políticas públicas coherentes y planificadas de parte de las autoridades del Ministerio para los Servicios Penitenciarios.





# MONITOREO

Durante el primer semestre del año se monitorearon 203 Centros de Detención Preventiva distribuidos en 15 estados de Venezuela. En el segundo semestre se monitorearon 239 CDP en los mismos estados. Como señalamos antes, la diferencia se basa en que se incorporaron 4 investigadoras más para mejorar nuestra cobertura del estado Miranda, del estado Vargas y del Distrito Capital. Cada una de las siguientes zonas del estado Miranda fue cubierta de manera independiente: los Valles del Tuy, el eje Guarenas-Guatire-Barlovento y los Altos Mirandinos. Además se cubrió de forma autónoma el estado Vargas. Cada una de estas regiones, todas aledañas a la capital y con gran número de habitantes fue monitoreada por una investigadora, quedando el Distrito Capital bajo la responsabilidad de la investigadora que anteriormente daba cobertura a esos estados.

Esta diferencia introdujo variaciones no necesariamente debidas a las acciones y medidas tomadas dentro de los CDP, sino al aumento del número de calabozos monitoreados. Esto nos lleva a presentar los datos del segundo semestre en este informe, y cuando lo consideremos necesario, haremos comparaciones y/o totalizaciones incluyendo el primer semestre. A manera de explicación demos una mirada a los datos globales de salud, con el objetivo de evidenciar las diferencias introducidas por los cambios señalados.

|              |                  | Matriz de salud, higiene y alimentación |                              |                                      |   |  |                                      |                                      |   |                            |                              |  |
|--------------|------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|--|
|              | CDP monitoreados | Acceso a servicios de salud             | Personal de salud disponible | Unidades de transporte de emergencia | Enfermedades infecto contagiosas, mentales y terminales | Hospitalización de reclusos                  | Acceso a tratamientos / medicamentos | Restricciones a servicios de salud   | Atención y controles de mujeres embarazadas | Reclusión riesgosa         | Alimentación                 | Acceso a productos de higiene, aseo personal y |
|              |                  | CDP con acceso a servicios de           | CDP con personal médico      | CDP con unidades de transporte de    | CDP con enfermedades infecto contagiosas                | CDP con casos de hospitalización de reclusos | CDP con acceso a tratamiento y/o     | CDP con restricciones a servicios de | CDP con atención y controles a              | CDP con reclusión riesgosa | CDP con alimentación diarias | CDP con acceso a productos de                  |
| 1er semestre | 203              | 76                                      | 10                           | 8                                    | 102   | 7  | 19                                   | 76                                   | 10  | 142                        | 1                            | 0  |
| 2do semestre | 239              | 118                                     | 4                            | 84                                   | 100   | 16   | 201                                  | 153                                  | 15  | 201                        | 222                          | 233  |

Lo primero que observamos es el aumento de CDP que se monitorearon entre el primer y segundo semestre: 203 en el primero y 239<sup>5</sup> en el segundo, es decir 36 nuevos CDP fueron incorporados lo cual significa un aumento del 18%. Esta diferencia hace que los datos entre uno y otro no sean necesariamente comparables. Veamos algunos ejemplos: los CDP que reportaron tener acceso a servicios de salud durante el primer semestre eran 76, es decir 37,4%; en el segundo semestre fueron 118, es decir 49,4%. Lo anterior nos habla de un aumento significativo del acceso a servicios de salud. Sin embargo, no podemos decir que hubo un aumento en la cobertura en salud o si fue el aumento de CDP monitoreados lo que hace esta diferencia. Más aún, si vemos que sólo 4 CDP o calabozos reportan tener personal médico propio, cuando en el primer semestre lo afirmaban 10. También se reporta un número creciente de CDP que cuentan con unidades de transporte de emergencia (de 8 a 84), datos estos que incluyen vehículos de todo tipo y no necesariamente ambulancias o, en su defecto, patrullas. Nos podemos hacer la misma pregunta: más vehículos o más CDP.

Los dos ejemplos anteriores evidencian que las matrices de los dos semestres no son total y globalmente comparables, lo cual no significa que no realicemos posteriormente la revisión de los aspectos más relevantes del año 2019 en las tres dimensiones trabajadas: Salud, Higiene y Alimentación; Demografía e infraestructura, y Sucesos e integridad personal. Aquellos indicadores de ambos semestres que pueden sumarse serán oportunamente señalados.

<sup>5</sup> Llegando en algunos casos a 241 o sólo a 238.



# HACINAMIENTO

Dada la importancia que el problema del hacinamiento tiene en los Centros de Detención Preventiva los cuales son nuestro objetivo de evaluación, el mismo es un tema central en nuestro análisis. Durante el año 2019 se detuvieron en los CDP o calabozos monitoreados 38.318 personas, pero a finales del año se encontraban detenidas solamente 19.268, es decir un 50,3%. Esta diferencia, a nuestro juicio se debe a la cantidad de detenidos por protestas políticas y manifestaciones durante el primer semestre, los cuales, luego muchos de ellos fueron dejados en libertad por lo arbitrario de su detención, ya que se encontraban ejerciendo su derecho a la protesta pacífica.

De este total que se encontraba detenido para el final del año encontramos, 17.800 hombres -92,4%-, 1.305 mujeres -6,77%- y 140 adolescentes de ambos sexos -0,37%. En menor número, pero no menos importantes, tenemos a 12 indígenas y 11 personas de la comunidad LGBTI, los cuales cada uno constituyeron un 0.03%. Estas protestas en su mayoría fueron políticas, por deficiencia salarial y por servicios de gas, agua y luz, entre otros. Veamos el comentario general de nuestro investigador en Nueva Esparta.

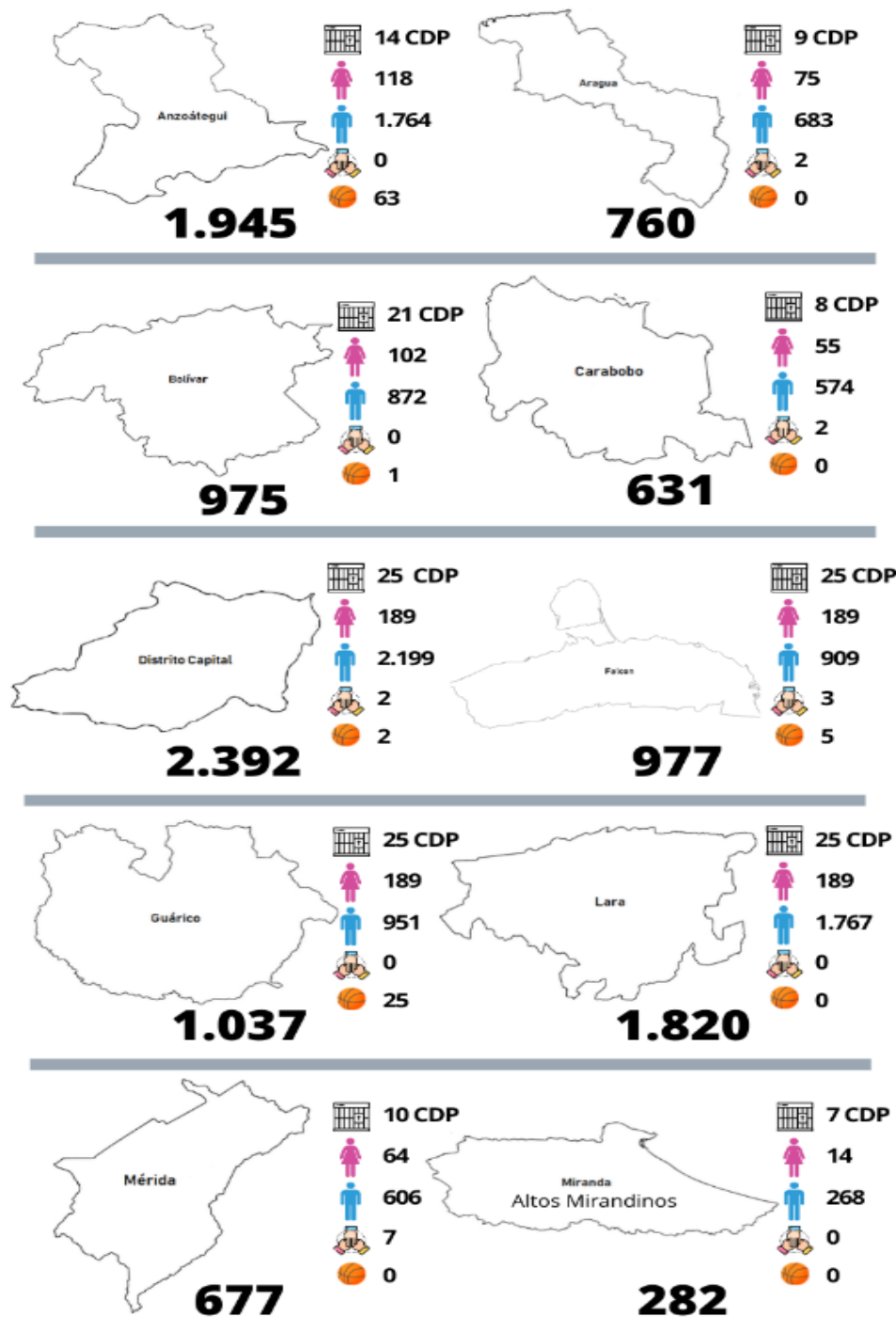
(Comentario general): La mayoría de los CDP tienen población LGBTI, no he logrado contabilizarlos ya que los familiares no aceptan o reconocen la sexualidad de sus allegados por temor. Estos son llamados "manchados" y se encargan de la limpieza del CDP... En los CDP de Los Robles y PoliMariño hay varias mujeres que se identifican como lesbianas<sup>6</sup>.

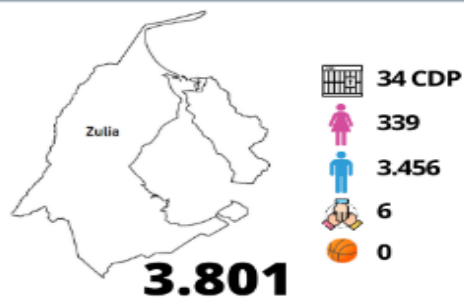
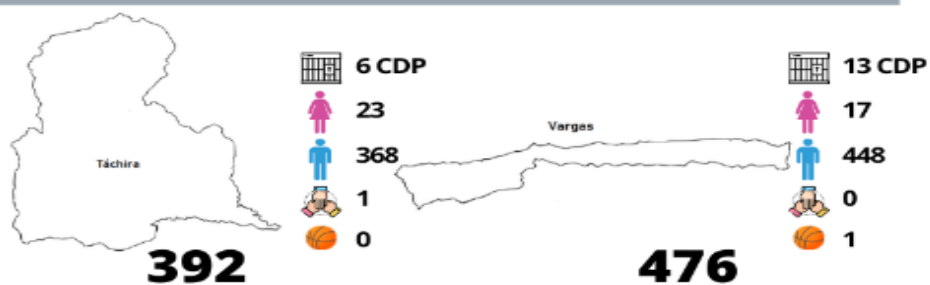
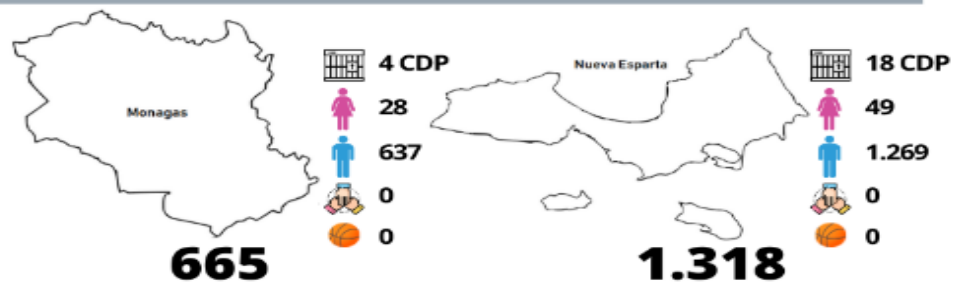
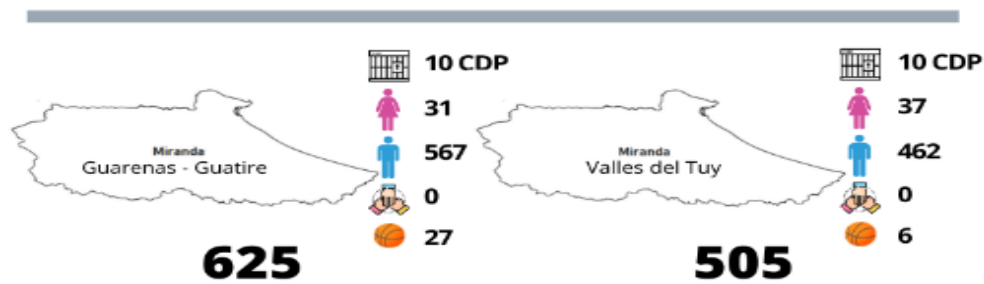
---

<sup>6</sup> Texto elaborado por nuestro investigador en el Estado Nueva Esparta.



# Monitoreo del número de detenidos en los CDP de Venezuela 2019





|              |  |                                   |        |                 |
|--------------|--|-----------------------------------|--------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> |  | Mujeres                           | 1.305  | <b>= 19.278</b> |
|              |  | Hombres                           | 17.800 |                 |
|              |  | LGTBI, Indígenas y Discapacitados | 23     |                 |
|              |  | Adolescentes                      | 140    |                 |



[unaventanaalalibertad.org](http://unaventanaalalibertad.org)

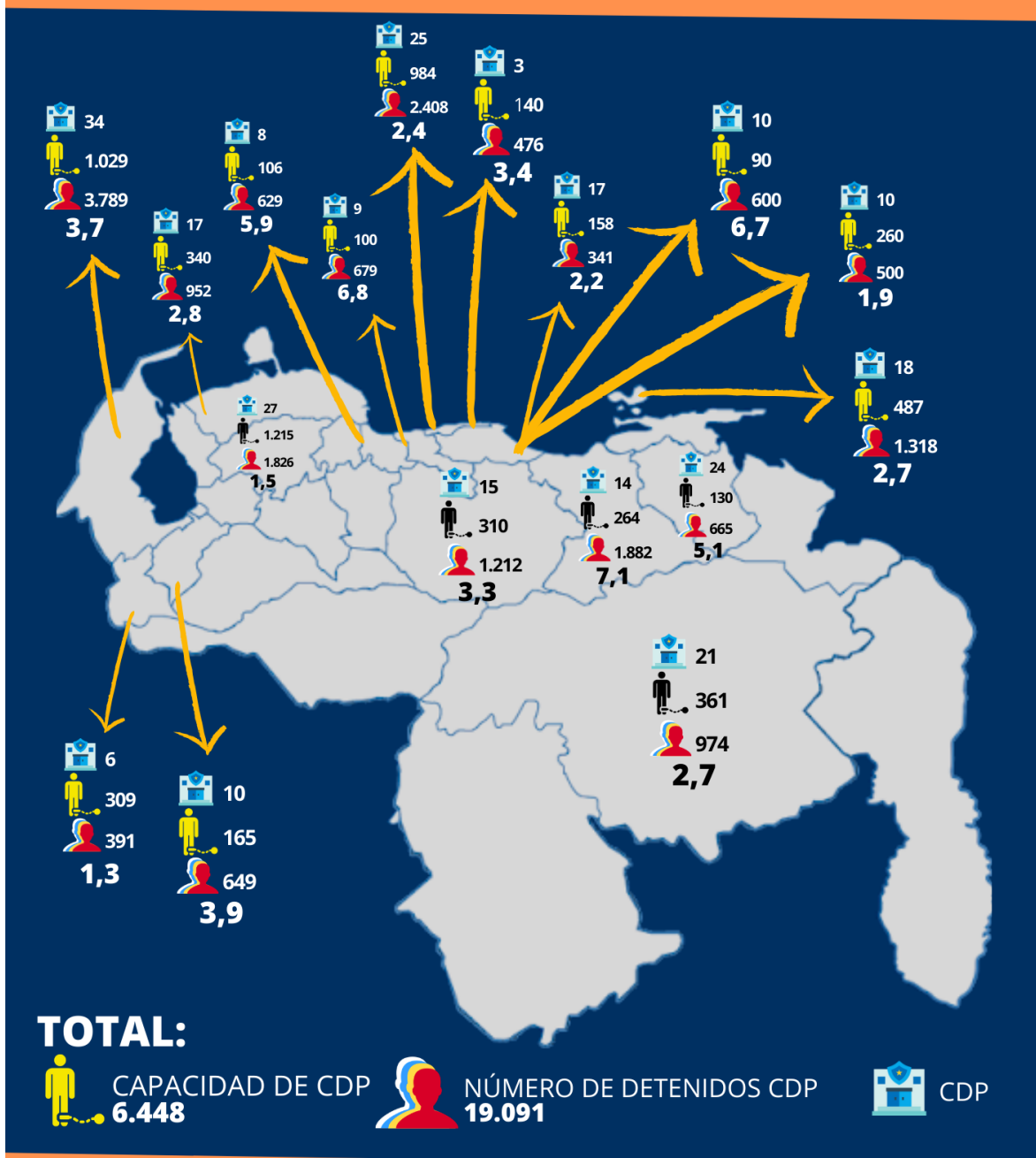
Cinco estados presentan más de 1.000 detenidos para el fin del año 2019. El estado Zulia acumula la mayor cantidad de detenidos en 34 CDP monitoreados con 3.795 detenidos, es decir el 20% del total: 3.456 hombres -90.9%- y 339 mujeres, es decir 8,9%, una cantidad superior al porcentaje nacional que es de 6,8%. Además se encontraban 5 indígenas -0.1%- y una persona LGBTI. En segundo lugar encontramos al Distrito Capital el cual con 25 CDP monitoreados tenía a final de año 2.388 detenidos, es decir 12,4% del total: 2.199 hombres -91.9%- , 189 mujeres -7.9%-, 1 indígena y una persona LGBTI – 0.04% cada uno, y 2 adolescentes -0.08%-. En tercer lugar, el estado Anzoátegui, en donde se monitorearon 14 CDP y alcanzó a finales de año un total de 1.945 detenidos, equivalente al 10% del total: 1.764 hombres -90.7%-, 118 mujeres -6.1%- y 63 adolescentes -3.2%-, siendo el estado que acumula un mayor número de adolescentes detenidos a finales del año 2019. En cuarto lugar y muy cerca del total de Anzoátegui encontramos el estado Lara con 27 CDP monitoreados, presentando un total de 1.820 detenidos es decir 9,4% del total: 1.767 hombres – 97.1% y 53 mujeres -2.9%-. Por último, en quinto lugar, encontramos al estado Nueva Esparta con 18 CDP monitoreados para el fin del año 2019 con 1.318 detenidos, equivalentes al 7% del total: 1.269 hombres -96.3%- y 49 mujeres -3.7%- del total. También se encontraron detenidos indígenas en los estados Falcón, Aragua y Táchira.

De los datos anteriores si calculamos el número promedio de detenidos por el número de CDP monitoreados por estado, tenemos que Anzoátegui en 14 calabozos tiene un promedio de 139 detenidos por CDP cuando su cupo establecido no supera los 20 detenidos. El estado Zulia con 112 detenidos en promedio en los 34 calabozos monitoreados, ocupa el segundo lugar. Esto es de esperar decimos, porque a pesar del mayor número de calabozos monitoreados en este último estado, también es cierto que en algunos CDP cuyo cupo es 100 detenidos encontramos 600 y otro con la misma capacidad alberga 1.037 detenidos de ambos sexos.



En el estado Miranda en el eje Guarenas-Guatire a finales del año 2019 había 27 adolescentes detenidos y 25 en el estado Guárico. Recordemos que cuando hablamos de adolescentes nos estamos refiriendo a jóvenes entre 14 y 18 años, lo cual significa que deberían estar bajo régimen de protección al menor y no entremezclados con población adulta.

# Hacinamiento por Centro de Detención Preventiva



[unaventanaalalibertad.org](http://unaventanaalalibertad.org)

No podemos asegurar cuantos de los detenidos en el primer semestre fueron liberados, aunque según nuestros datos sabemos que aproximadamente el 50% de ellos y ellas fueron dejados en libertad, debido al número de detenidos existentes para finales del segundo semestre. Sin embargo, esto no quiere decir que no hubiese hacinamiento durante al final del año. Si vemos los datos encontramos que el total de los cupos existentes en los 238 CDP monitoreados para diciembre 2019 era solamente de 6.448, y se encontraban detenidos 19.091 hombres, mujeres y adolescentes. Esto significa que las personas detenidas eran 2.96 veces la capacidad de cupos, lo cual si bien es menor que en el primer semestre, sigue siendo preocupante. Además, la distribución de seres humanos detenidos es muy irregular; por ejemplo, encontramos que en 5 estados el número de detenidos es más de 5 veces su capacidad. Estos son:

- (1) Anzoátegui en 14 CDP monitoreados presenta 7,1 veces su cupo de detenidos. Nuestra investigadora en el estado nos reporta que:

En la sede de la Policía del Municipio Bolívar, ubicado en el sector Palotal de Barcelona hay 110 en un espacio para 10 personas... 22 de los presos son mujeres... En la sede del Cicpc Eje de Homicidios ubicada en el Complejo Polideportivo José Antonio Anzoátegui de Barcelona alberga a 110 presos (7 mujeres) en un espacio destinado para 10 personas... La sede de la Policía del Municipio Bolívar, ubicado en el sector Barrio Corea de Barcelona alberga a 99 presos en un espacio para 5 reclusos... 7 de los reclusos son mujeres<sup>7</sup>.

- (2) Aragua en 9 CDP alberga 6,8 veces su cupo<sup>8</sup>;
- (3) el eje Guarenas-Guatire del estado Miranda tenía en 10 CDP 6,7 veces su cupo de detenidos;
- (4) el estado Carabobo en 8 CDP monitoreados tenía 5,9 veces su cupo y,
- (5) Monagas solamente en 4 CDP monitoreados albergaba 5,1 veces el cupo de su capacidad de personas detenidas. Táchira y los Valles del Tuy en el estado Miranda presentaron el menor hacinamiento.

Caracas no aparece entre los que presentan mayor hacinamiento, pero es grave la situación en la conocida Zona 7 de Boleita. Según los mismos reclusos: «En este calabozo hay hacinamiento crítico, hay filtraciones, no hay acceso a la luz del día y no hay ventilación»<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Síntesis elaborada a partir de la información recogida por la investigadora en el estado.

<sup>8</sup> Aun cuando 6 CDP monitoreados no informaron cuanto era su cupo.

<sup>9</sup> Información obtenida por nuestra investigadora en la ciudad de Caracas de un detenido en este CDP.



Solamente 18 CDP -7.5%- reportan tener áreas separadas para mujeres, hombres, adolescentes entre 14 y 18 años, y población LGBTI. Es decir, no sólo la cantidad de personas detenidas es muy superior a la capacidad de los CDP sino que, estas se encuentran entremezcladas sin espacio suficiente y sin consideración de ningún tipo; esto no sólo explica la violencia sexual sino, en general la violencia entre detenidos y mucha de la violencia de los custodios. No olvidemos que muchos detenidos permanecen más del tiempo debido y que, además, lo hacen en condiciones de extrema inseguridad para su vida y en extrema pobreza en cuanto a su calidad de vida.

Hablando de las mujeres detenidas, tenemos que se mantuvo bastante estable con una disminución no significativa. Durante el primer semestre contabilizamos 1.446 mujeres y a finales del segundo semestre tenemos 1.305. Sin embargo, de acuerdo a nuestra información, sus condiciones de detención no han mejorado. Es una costumbre decir que las mujeres embarazadas son una prioridad en la atención de salud tanto así que la mortalidad materna e infantil son los mejores indicadores epidemiológicos sobre la situación de salud de un país. Pues, de los 239 CDP que fueron monitoreados en el segundo semestre ninguno tiene un área separada para ellas; solamente 15 – 6.3%- reconocen alguna atención a las mujeres embarazadas: en 4 de ellos se las traslada sólo cuando van a dar a luz. En tres se traslada a la reclusa para controles prenatales esporádicos. Solamente 1 señala que se traslada a la reclusa para controles prenatales mensuales y otro señaló que se incluye a las reclusas –aún las embarazadas- en las jornadas de salud esporádicas. Esta información es más delicada cuando observamos que 165 -69%- de los CDP monitoreados, reconocen dar atención en los mismos términos o en condiciones iguales a hombres y mujeres. Veamos un comentario que nos presentó nuestra investigadora en el Zulia.

Las embarazadas no quieren repetir la historia de una compañera. "Parió, en septiembre de 2019, en pleno pasillo. Hasta que los policías no le vieron colgando el bebé entre las piernas no la trasladaron al hospital. Su primer parto fue cesárea y la obligaron a parir aquí adentro"... Otra de ellas contó que el tribunal no les garantiza ningún beneficio después del parto. "*Todas*

*salimos embarazadas aquí adentro y los beneficios para la lactancia son para aquellas a quienes detuvieron en estado". Solo pueden estar con sus hijos 45 días después del parto, luego deben buscar a algún familiar y entregárselo. "El destete obligado es terrible. Vi a una compañera enfermarse hasta que se le secó la leche. Su familia no tenía para comprarle leche al bebé, lo traían para que le diera la teta y lo dejaban esperando horas afuera. Su mamá decidió no traérselo más"*<sup>10</sup>.

La situación de las mujeres se complica aún más si observamos que sólo 104 CDP durante el segundo semestre informan tener *áreas separadas* para ellas. De estos, la mayoría 37% dice disponer de un *área pequeña separada de hombres sin dotación para mujeres* y el 33% disponen de un *área improvisada sin dotaciones de ningún tipo*. Por último, y sólo para la comparación, únicamente 2 CDP -2%- afirman disponer de un *área separada de hombres con igualdad de espacio dotada para mujeres*.

Pero no todas las mujeres reclusas están embarazadas como es el caso de una detenida en un Centro de Detención Preventiva de la ciudad de Caracas, la Sub Delegación Cicpc<sup>11</sup> San Agustín del Sur en la llamada Celda G. Este es bastante explicativo de lo dicho hasta ahora y sobre el impacto de la emergencia humanitaria en la población detenida o reclusa:

Fuentes extraoficiales de la Sub Delegación del Cicpc de San Agustín del Sur confirmaron a Una Ventana a la Libertad que una interna de 30 años de edad murió en abril de este 2019 de cáncer de ovario. La reclusa estaba detenida desde 2018 por el delito de robo, pues según información policial, la mujer había declarado que robó para poder comprar los medicamentos que requería<sup>12</sup>.

La cita anterior evidencia la violación del derecho a la salud y la vida de las y los detenidos, porque sería muy ingenuo suponer que es el único caso. Es de suma gravedad que cualquiera persona muera dentro de un CDP, y mucho más cuando es conocido su estado de salud y la posibilidad de mejorar su calidad de vida y sobrevivencia, brindándoles atención médica lo cual es obligación del Estado.

---

<sup>10</sup> Texto redactado por la investigadora del estado Zulia.

<sup>11</sup> Cicpc: Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

<sup>12</sup> Texto redactado por la investigadora de la Región Capital

Parecería que su condición de detenido supera su naturaleza humana, lo cual habla de una negación absoluta de justicia a las personas detenidas.

Veamos otros casos, como por ejemplo las enfermedades crónicas, «Gabriela sufre de diabetes. Sus compañeros aseguraron que la precariedad de su higiene personal le provocó accesos en la cabeza. “Haciéndole una limpieza le sacamos un gusano”, denunciaron». Esto sucedió en el estado Zulia. Y, un último ejemplo del mismo estado, que puede ser considerado inhumano y que fue narrado por sus compañeras de detención.

A mediados de octubre de 2019, Mary Carmen Bermúdez recibió un tiro de escopeta por la espalda en su celda. El proyectil le abrió la cadera. “Los funcionarios tardaron más de 24 horas en trasladarla al Hospital General de Santa Bárbara del Zulia. De ahí la remitieron al Hospital de El Vigía. Tras estabilizarla, la enviaron nuevamente al hospital de Santa Bárbara y al retén, denunciaron sus compañeras de celda...” “No tenemos condiciones para atenderla. Su madre debe movilizarse hasta Maracaibo, unas 10 horas en carro desde el centro de detención, para tramitar su traslado nuevamente al hospital”.

Pasemos ahora a una revisión más a fondo la situación de la infraestructura en la cual se encuentran hacinados las y los detenidos en los CDP monitoreados. Del total de 238 calabozos, solamente 29 -12,2%- reportan tener una *infraestructura y organización óptima o aceptable*. Como vemos las condiciones de vida en el resto de los CDP son inaceptables para la convivencia humana de tantas personas. En cuanto al acceso a los *servicios básicos*, la situación es bastante precaria. El *agua potable*, sólo 152 CDP -64%- admite que les es suministrada, no podemos afirmar si es la familia cuando los visita o si la suministra el mismo CDP, pero en general, el agua para consumo es proporcionada junto con alimentos y medicamentos por las familias de los detenidos. En cuanto al *servicio de recolección de basura*, 183 -77%- de los calabozos tienen acceso a ella, pero no sabemos con qué frecuencia.

En cuanto a *baños e iluminación* sucede lo mismo, 106 -44%- CDP afirman tener acceso a los mismos pero de ellos sólo 34 -14% del total monitoreado (239 calabozos) afirman tener duchas en los baños. Una información adicional que nos deja cuando menos preocupados por las condiciones higiénicas de los CDP, es que



17 -7% del total- informa tener letrinas e iluminación artificial; 15 -6%- además de letrinas afirma tener duchas y, 10 -4%- utilizan letrinas y duchas improvisadas. Como podemos suponer las condiciones de la infraestructura de los calabozos no parecen muy aptas para mantener personas detenidas garantizándoles en lo más mínimo sus derechos fundamentales a la salud y calidad de vida. Por si lo anterior fuese poco, sólo 5 -2%- de los 239 CDP monitoreados cuentan con *condiciones especiales del recinto según casos de discapacidad*.

Otra información interesante es que 93 -39%- CDP afirman tener *acceso a servicios adicionales: canales de comunicación*. Lo más frecuente es el disponer de televisión en el calabozo, 62 o sea el 25,9% del total de los 239 CDP monitoreados. La radio está disponible sólo en 41 de los 239 (17%). Teléfono local está disponible solamente en 30 -13%- de los calabozos monitoreados. Pero lo que realmente llama la atención es que 50 -21%- CDP afirmen tener acceso a celulares. Esto no sólo es reconocer el uso libre de los mismos, sino que nos confirma la información frecuente en los medios de comunicación, que afirma que los delitos cometidos en la calle, son en muchas oportunidades organizados desde calabozos o prisiones. Evidentemente, estos delitos se le adjudican a los llamados pranés en connivencia con delincuentes libres, pero sabemos que mucho del control interno sobre las personas detenidas de parte de quienes ostentan algún *poder informal* en los calabozos, se organiza con los celulares.

# Procesados y sentenciados 2019



**PROCESADOS**

**3370**

**93,8%**



**SENTENCIADOS**

**221**

**6,2%**



Pasando a otros indicadores, encontramos algunos datos sobre el *debido proceso* de las personas detenidas en los calabozos monitoreados. Solamente 18 CDP -7.5%- entre ellos los 14 de Anzoátegui, reportan tener reclusos en privación ilegal de la libertad, básicamente sin orden de captura. En Miranda –tanto en los Altos Mirandinos como en el eje Guarenas-Guatire- se mantienen detenidos en diciembre 74 casos -8.2%- personas por protestas políticas o manifestaciones. En el mismo sentido encontramos que 25 -10,5%- CDP informan tener sentenciados entre la

población detenida. Estos ascienden a 301 – 0,8%- casos de detenidos que ya debían haber sido trasladados a la respectiva cárcel o prisión asignada para el cumplimiento de su condena lo cual disminuiría en algo el hacinamiento. Lo anterior significa que 3370, es decir el 93,8% de los detenidos para finales del 2019 se encuentran procesados, muchos de ellos por largo tiempo, violándose así todas las pautas del debido proceso. Esto, según nuestro criterio, debe ser vivido por cada uno o una de estas personas como una tortura, silenciosa y permanente.

También encontramos el tiempo que muchos detenidos permanecen en los calabozos. En el primer semestre se reportaron 33 CDP de los 203 monitoreados (16%) en los cuales se encontraban detenidos que permanecían más de tres meses. Aun cuando no podemos sumarlos a los del segundo semestre pues no sabemos si algunos de ellos fueron liberados para entonces, estos aumentaron a 73 CDP (30,5%) de los 239 monitoreados. Zulia con el mayor número en 6 CDP, o sea el 22%: 1 detenido en un CDP con 2 años, 3 CDP con reclusos con 3 años de permanencia, 6 CDP con casos de 4 años y 2 CDP con detenidos por 5 años. En Monagas se encuentra un caso que tiene 7 años de detención en un CDP.

*¿Debido proceso?* Los centros de detención preventiva, como su nombre lo indica son para permanencias cortas, por ello son presentados máximo a las 48 horas a la autoridad correspondiente a fin de que se inicie la investigación, ya sea que se haya detenido a la persona en flagrancia o no, y se decida si debe ser liberado, procesado en libertad o ser transferido a una cárcel o prisión. Pero en nuestro país, a pesar de las disposiciones constitucionales y la normativa internacional a la cual Venezuela se ha comprometido a respetar, la situación no es así. Citemos la afirmación de Leonardo Rodríguez Angola, en su trabajo para UVAL sobre retraso procesal:

...son miles las personas que privadas de libertad sufren en condiciones inhumanas los efectos del retardo procesal. Por lo tanto, ¿existe una relación entre la transgresión del derecho fundamental a ser procesado en libertad y el retardo procesal? Ciertamente que sí, ya que la investigación sugiere que el retardo procesal permite la sobrevivencia de un sistema, que es anómalo y que desvirtúa los principios que rigen



el proceso judicial en un país democrático, pero en el que ciertamente la libertad tiene un costo y la celeridad procesal también; libertad y celeridad procesal, son dos conceptos que se complementan en un sistema judicial apegado a los principios de un estado de derecho, mientras que, en un Estado en donde se han fracturado las garantías constitucionales, los conceptos que se complementan son restricción de la libertad personal y retardo procesal<sup>13</sup>.

Volvemos así al punto inicial de este trabajo. Mientras el *Estado de derecho democrático* no impere en el país, es sumamente difícil esperar que los derechos fundamentales se garanticen a la población; situación que nos ha llevado a la *Emergencia Humanitaria Compleja*. Estas garantías de derechos, mucho menos se aseguran a la población considerada vulnerable por estar privada de su libertad, lo cual le impide el disfrute de este derecho y permanecen por ello bajo la responsabilidad absoluta del Estado, sea cual sea la causa de su detención. No olvidemos que el objetivo de las instituciones del Sistema penitenciario es el acceso a la justicia para víctimas y victimarios. Para eso se postulan una serie de planes y programas que permitan la rehabilitación de las y los detenida/os, y su capacitación laboral y educación para que a su retorno a la libertad estén en capacidad de asumir una vida acorde a la convivencia y respeto ciudadano. Obviamente esto no se puede lograr en los calabozos diseñados para una corta permanencia de 48 horas, razón que explica las terribles condiciones en que se encuentran.

Una información adicional: de los 239 CDP monitoreados para el final del año 198 se consideran de tipo civil, es decir calabozos administrados por la Policía Nacional Bolivariana, las policías municipales o regionales, y por el CICPC. Lo anterior significa que los restantes 41 CDP -17,2%- monitoreados están bajo la custodia de la Guardia Nacional Bolivariana, es decir, militares. Solamente 8 CDP consideran que se encuentran en riesgo de habitabilidad: 1 en el Distrito Capital por estar ubicado en un terreno con riesgo de sedimentación del suelo lo cual hace que se encuentre expuesto a posibles derrumbes. Los 7 restantes se encuentran en el estado Mérida

---

<sup>13</sup> Rodríguez Angola, Leonardo (2019). *Informe Especial sobre la Situación del Retardo Procesal para los Privados de Libertad en los Centros de Detención Preventiva de Venezuela*. UVAL

pues están ubicados en una zona telúrica. Hacinamiento y situación de riesgo, es una mezcla explosiva en estos CDP.

A continuación veremos como todas las normas y planes puestos en acción para resolver los problemas de las instituciones a cargo de las personas detenidas, no han generado mejores condiciones de vida para ellos y ellas. Por el contrario, son improvisados y sin continuidad en el tiempo, lo cual disminuye su eficiencia.

En el caso que nos compete los Centros de Detención Preventiva –CDP- conocidos históricamente como calabozos, tenemos una permanente situación de ambivalencia debido a la negativa explícita y sostenida por la Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de permitir el traslado de las y los detenidos a los centros penitenciarios correspondientes, mientras se cumplen los pasos del proceso de investigación, juicio y sentencia, y que obligatoriamente permanecen en los calabozos o CDP, a pesar de que ya hayan sido presentados en el transcurso de las 48 horas ante las autoridades competentes<sup>14</sup>. Esa decisión ha generado que los calabozos se hayan convertido en el depósito de seres humanos en donde se acumulan hombres, mujeres y algunos adolescentes y personas de la comunidad LGBTI, en situación de hacinamiento excesivo y condiciones extremas de violación de derechos humanos fundamentales, particularmente el derecho a la salud, alimentación y la vida. A pesar de que esta situación es de absoluto conocimiento de las autoridades correspondientes, sólo actúan con medidas paliativas cuando la presión nacional o internacional exige respuestas<sup>15</sup>, aún a sabiendas de las críticas situaciones de hacinamiento y salud.

---

<sup>14</sup> Ver: UVAL (2018). **Informe de los siete años de gestión de la ministra Iris Varela**. Caracas.

<sup>15</sup> Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. **Consejo de Derechos Humanos 41º período de sesiones**. 24 de junio–12 de julio de 2019.



# SALUD

Íntimamente vinculado al tema anterior tenemos los problemas de salud en los Centros de Detención Preventiva o calabozos. Uno de estos problemas se refiere a la convivencia en espacios no aptos de personas enfermas y personas saludables. Esto es más grave cuando las personas con problemas de salud sufren de enfermedades infectocontagiosas. Esta situación puede llevar a la muerte.

De los 239 CDP monitoreados, 100 reportan la presencia de enfermedades de este tipo: gripe, piojos o pediculosis, parásitos, enfermedades de la piel y enfermedades respiratorias. Estas últimas se agravan por la situación de hacinamiento. Si sumamos los casos del primer semestre, aún a riesgo de repetir alguno de ellos puesto que varios pueden encontrarse aún enfermos y detenidos, la situación se hace alarmante, y por ello podemos entender la emergencia sanitaria que movilizó al Ministerio para el Servicio Penitenciario a realizar jornadas de salud poco productivas e improvisadas, lo cual no garantiza el seguimiento de los casos.

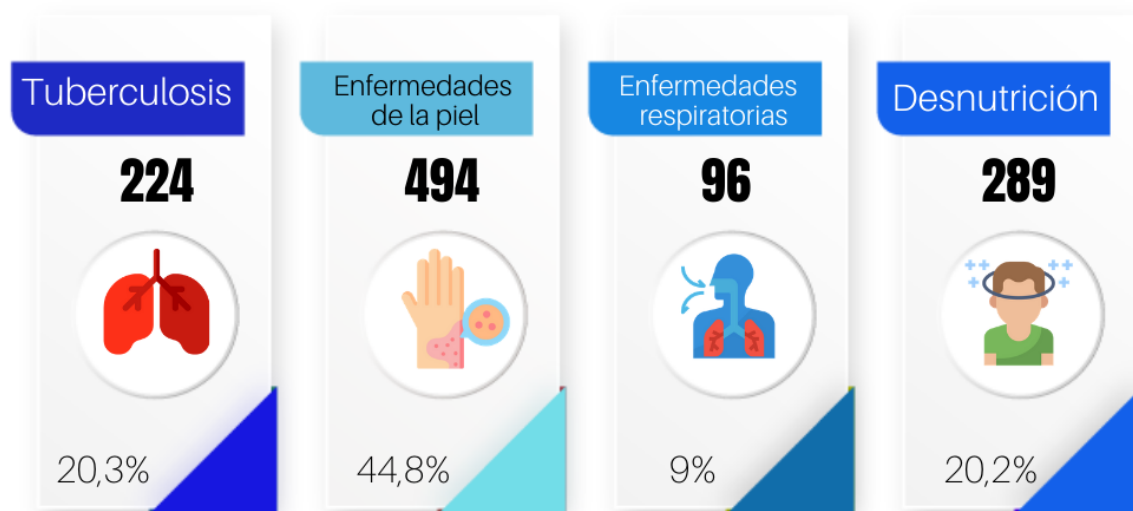
Pudimos identificar un total de 1.109 casos de personas enfermas en los calabozos. Las enfermedades infectocontagiosas siguen siendo las más comunes: 98 CDP monitoreados reportan la presencia de enfermedades de este tipo<sup>16</sup>. Las enfermedades de la piel son las más frecuentes, lo cual está directamente asociado al hacinamiento. Fueron identificados 494 o 45% de casos a finales de 2019 con problemas como sarna (la más frecuente), eczemas, psoriasis, etc.

---

<sup>16</sup> En tres estados no se pudo conseguir ninguna data.



## Enfermedades infectocontagiosas en los CDP 2019



**Total 1.103 Enfermos**



Un hallazgo que nos merece una consideración especial en relación con la salud de las personas detenidas, es la alta frecuencia reportada en el segundo semestre de 2019 de casos de desnutrición, aun cuando no pudimos conocer su género. Si bien no son enfermos por alguna infección como el resto, si hace a las 289 personas desnutridas más frágiles y propensas a contraer cualquiera enfermedad presente en su entorno. Lo anterior significa que no será la desnutrición la causa de muerte por lo general, sino la enfermedad que los afecte al final y, probablemente, la desnutrición no aparecerá en la partida de defunción, y por ende, en las estadísticas. Lo más grave de esta situación estriba en que estas personas dependen del Estado pues están detenidas y su dieta alimentaria y de medicamentos debería ser prioridad del ministerio responsable de estos calabozos. Una fuente consultada nos indica que

se estima una prevalencia de un 10% de enfermos desnutridos aumentando hasta el 60-85% en caso de personas institucionalizadas<sup>17</sup>. Veamos algunos casos en el estado Nueva Esparta, en donde casi todos los CDP tienen carencia alimentaria. El ejemplo que vamos a citar pertenece a dos CDP, uno de ellos para mujeres.

Los privados no consumen una dieta apropiada, por lo que se podría decir que la mayoría está mal nutrida... Las privadas no consumen una dieta apropiada, por lo que se podría decir que la mayoría está mal nutrida<sup>18</sup>.

Si esto sucede en hospitales no sorprende lo que vemos en los calabozos, particularmente en el caso de una población recluida que depende de que su familia le lleve los alimentos para poder ingerir la dieta necesaria, más aún cuando están enfermos. Este es un tema sumamente delicado en cuanto a la salud de las personas detenidas cuando la dieta alimenticia depende de sus familiares y no de la institución responsable. No podemos calificar la situación de menos que patética, pues de los 233 (97%) CDP que respondieron este indicador, 219 (94%) afirmó que la alimentación de las personas detenidas depende de que sus familiares les lleven productos o comida preparada. Todas las otras fuentes de donaciones, comida no perecedera, etc., son esporádicas. Pero, sumado a esto 201 (84%) CDP reportan que el acceso a medicamentos y/o tratamientos dependen en un 94% (189) de los familiares. Surge una pregunta, ¿cuántos detenidos y detenidas se encuentran fuera de su región de origen lo cual impide que algunas de las mujeres de su familia puedan acceder, de manera permanente, a proveerles alimentación y medicamentos? ¿Cuántas personas detenidas no tienen familiares que puedan ayudarles?

---

<sup>17</sup> Rodríguez-Martín, A.; J. P. Novalbos-Ruiz y otros. *Implicaciones de la desnutrición en atención primaria. Nutrición Hospitalaria*. Vol.25, supl. 3, Madrid oct. 2010

<sup>18</sup> Síntesis elaborada a partir de la información recogida por el investigador del estado Nueva Esparta.



Recordemos que es obligación del Estado por medio de la instancia responsable de las personas detenidas o presas en el país, entiéndase Ministerio para el Servicio Penitenciario, el suministro de alimentación y medicamentos a los calabozos o CDP a nivel Nacional y no las instancias de adscripción, pues su responsabilidad es sólo por 48 horas en promedio. Es decir quien está violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y todos los principios presentes en las normativas internacionales aceptadas por el país en relación con el tema de las personas detenidas o presas, es el Ministerio para los Servicios Penitenciarios.

Hay un elemento del cual no tenemos mucha información pero que quedó evidenciado en un comentario de nuestro investigador en Nueva Esparta: el costo del transporte para poder acceder a visitar, llevar alimentos y medicamentos al familiar detenido.

Los CDP en Nueva Esparta están ubicados en zonas pobladas y con rutas de transporte cercanas. El pasaje corto cuesta unos 1.500 bolívares, mientras que para rutas

suburbanas el valor es de Bs. 4 mil y la más costosa es la de Boca de Río en Bs. 9 mil.  
**Por su parte, la carrera mínima son 2 dólares.**

Otro impedimento que surge con la entrega de alimentos y medicamentos de parte de los familiares es que, quienes tienen quien se los suministre enfrentan otro problema: la corrupción de los funcionarios y en algunos casos, el cobro de parte de los pranes del calabozo. Este delicado tema solamente fue reportado por 85 CDP, es decir, el 36% de los calabozos monitoreados. Pero, este porcentaje de respuesta no disminuye la importancia de la información. Veamos los datos por indicador: 64% de estos afirman que a las familiares se les cobra por introducir al penal *alimentos y bebidas*; 52% informan que lo mismo sucede para permitir el ingreso de *medicamentos*. Pero, el 42% afirman que les cobran por permitir el ingreso de las visitas y, el 31% que se les cobra por ser incluidos en los traslados y agilización del proceso.

Los familiares de los privados de libertad del Centro de Detención Preventiva de Ciudad Cartón en Porlamar, municipio Mariño, estado Nueva Esparta, denunciaron el 16 de octubre de 2019 a los funcionarios del Iapolebne por hacer cobros indebidos por visitar a los presos en los días que no corresponden, por permitir pasarles comida o ropa fuera de los horarios que está establecidos... Por recibir los alimentos fuera de horario pidieron 20 mil bolívares, mientras que por permitir visitas fuera de horario a familiares foráneos pidieron 20 dólares<sup>19</sup>.

Lo anterior nos indica que, ante la situación de emergencia humanitaria que vivimos en Venezuela muchas familias no están en capacidad de alimentar a sus integrantes y a la persona detenida. Podemos suponer, que muchas de ellas no pueden incluir en sus gastos la alimentación, medicinas y “vacunas” o extorsiones de los funcionarios, además del costo del transporte diario. En estos casos, la sobrevivencia dependerá de la solidaridad de otros detenidos o de lo que pueda encontrarse en la basura del calabozo.

Esta situación es sumamente grave cuando, además en los CDP no se atiende el problema de salud de las personas detenidas. Veamos de nuevo el ejemplo de una mujer enferma y detenida en un calabozo el cual es un caso impactante:

---

<sup>19</sup> Texto elaborado por el investigador del estado Nueva Esparta.



Fuentes extraoficiales de la Sub Delegación del Cicpc de San Agustín del Sur confirmaron a Una Ventana a la Libertad que una interna de 30 años de edad murió en abril de este 2019 de cáncer de ovario. La reclusa estaba detenida desde 2018 por el delito de robo, pues según información policial, *la mujer había declarado que robó para poder comprar los medicamentos que requería*<sup>20</sup>.

En la cita anterior están visibles los efectos más adversos de la emergencia humanitaria compleja en proceso constante de profundización, que enfrentamos en nuestro país. Una mujer con una enfermedad crónica sin acceso a los costosos medicamentos que dicha enfermedad requiere; desesperada recurre a la única alternativa que puede encontrar –como es el caso de muchos y muchas venezolanas–, la vía del delito de robo como alternativa de sobrevivencia<sup>21</sup>. Por otro lado, al ser detenida de inmediato debió ser referida a un centro hospitalario con especialidad en tratamiento de cáncer, a fin de comprobar la información que ella suministró y resguardar su derecho a la vida tal como es obligación del Estado venezolano. Evidentemente, esto no se llevó a cabo a pesar del tiempo que estuvo detenida, al menos la fuente consultada no refiere que en algún momento esto haya sucedido.

Lo acontecido con esta mujer y muchos otros casos, es evidencia de que los detenidos y las detenidas en nuestro país siguen siendo víctimas permanentes por la violación de sus derechos humanos fundamentales, incluyendo el debido proceso lo cual los mantiene en situación de riesgo a su derecho a la vida, la salud y todos aquellos derechos que no les deben ser privados por el hecho de estar sometidos a custodia del Estado. Lamentablemente, nos toca volver a recordar la vieja expresión de la época colonial: *La ley se acata pero no se cumple*, nunca antes más acertada que durante los largos 20 años transcurridos del Siglo XXI.

---

<sup>20</sup> Texto original de nuestra investigadora en el Distrito Capital.

<sup>21</sup> El fallecido presidente Hugo Chávez, en un discurso señaló “Si yo fuera ese hombre joven que lloró conmigo ayer en la puerta de la catedral de Caracas; si yo fuese él y viera a mi hija a punto de morir de hambre, yo creo, yo, saldría a la media noche a hacer algo, para que mi hija no vaya a la tumba...” La claridad de este mensaje se tornó en una expresión común: Chávez dijo que se podía robar. **Youtube**, consultado el 24 de enero de 2019.

## Acceso a alimentos y medicamentos en los CDP 2019

### CDP 215



**Familiares**  
192 / 89,3%

**Donaciones**  
32 / 14,9%

**CDP**  
3 / 1,4%

### CDP 201



**Familiares**  
189 / 94%

**Donaciones**  
28 / 13,9%

**CDP**  
12 / 6%



Durante el primer semestre del año, 30 CDP reportaron muertes de detenidos bajo la custodia del Estado y durante el segundo semestre 53 reportan muertes bajo custodia. Esto significa un aumento de 17 calabozos para el segundo semestre, lo cual sumaría 77 calabozos. En esta parte veamos sólo las causas de muerte que pudimos obtener y que se vinculan a problemas de salud, es decir 26 muertes

reportadas en los CDP durante el segundo semestre<sup>22</sup>. A pesar de lo pequeño del dato, la primera causa reportada es la tuberculosis, al igual que en el primer semestre, habiendo 8 fallecidos por esta enfermedad -36,4%-; luego encontramos que las muertes por enfermedades crónicas como hipertensión, cáncer y VIH fueron 7 -32%- la mayoría 3 por cáncer y 3 por problemas cardiovasculares e hipertensión; y 1 caso por VIH. También encontramos 3 por problemas respiratorios no especificados y 1 para cada una de las siguientes enfermedades: vesícula, neumonía, desnutrición y enfermedad viral. Si agregamos los muertos del primer semestre por salud 20 en total tenemos 46 casos de muerte por salud bajo custodia y por enfermedades tratables.

Por último, y a manera de cierre de la evaluación de salud en los CDP, tenemos una situación sensible, la cual es el número de CDP que afirman presentar *condiciones riesgosas de detención*. Esto nos hace entender claramente todo lo dicho hasta ahora sobre la situación de salud de todas las personas detenidas en los calabozos en Venezuela. Durante el primer semestre 142 CDP informaron que la detención era riesgosa. Durante el segundo semestre este dato aumento a 201. Analizaremos este último número, pues si no todos (alguno podría haber mejorado sus condiciones internas) la mayoría se encuentra incluido el total del segundo semestre.

En estos centros, la primera causa de riesgo para 186 calabozos (93%) es la *falta de saneamiento del recinto*, es decir un serio problema sanitario. Para 183 o sea el 91% es un problema vinculado al *hacinamiento* que presentan, cosa que señalamos arriba; y vinculado a lo anterior, 160 calabozos (80%) afirman que la principal causa de riesgo es la *mezcla de reclusos sanos con reclusos enfermos*. Esta información señala claramente que los problemas derivados del no cumplimiento del debido proceso son las principales situaciones de riesgo de salud y vida de las personas – hombres, mujeres y adolescentes cualquiera sea su condición- que permanecen

---

<sup>22</sup> Este pequeño número de muertes por salud parece contradictorio, más no es así si consideramos el poco acceso que tuvimos a este indicador. Solamente un 20% de los CDP entrevistados dieron alguna información al respecto.

detenidos en los Centros de Detención Preventiva venezolanos, más del tiempo reglamentario.

Sin embargo, cuando es posible, las y los detenidos se las ingenian para protegerse de las enfermedades, particularmente las infecto-contagiosas. Veamos el caso de un CDP en el estado Zulia que nos reportó nuestra investigadora.

El 40 por ciento de los reclusos son foráneos y no asisten al médico por no tener un familiar que le agilice su traslado al Hospital General de Santa Bárbara o al Centro de Diagnóstico Integral...Para evitar contagios, tanto hombres como mujeres optaron en aislar a la población enferma. Las mujeres dividieron su calabozo en dos: Uno pequeño para quienes ellas consideran con patologías contagiosas como enfermedades en la piel o respiratorias. Y otro, más amplio para las embarazadas, quienes tienen heridas por arma blanca o fuego, alguna otra dolencia y las sanas. Los hombres aislaron a sus enfermos en las áreas externas del retén y en las escaleras. La pernocta para los tuberculosos, quienes presentan cuadros virales o enfermedades respiratorias es en el techo o cerca de los tanques, mientras el que presenta otra patología puede quedarse en el pasillo cercano a las escaleras.



## Detenidos bajo situaciones de riesgo para la salud y la vida en los CDP **2019**



Falta de saneamiento  
del recinto **186** 93%



Hacinamiento **183** 91%



Mezcla de reclusos  
sanos con reclusos  
enfermos **160** 80%



[unaventanaalalibertad.org](http://unaventanaalalibertad.org)

Ahora revisemos otros elementos del componente salud. El número de CDP que informaron tener acceso a servicios de salud aumentó del primer al segundo semestre de 76 a 118, lo cual se puede deber al aumento de CDP cubiertos en el monitoreo o a mejoras introducidas en los calabozos. A la vez, disminuye sensiblemente el número que reporta tener personal médico disponible (de 10 a 4). Lo que parece importante es el aumento de CDP que reportan tener acceso a transporte de emergencia –aunque la mayoría son patrullas que están adjudicadas a la jefatura o a la policía, más no al CDP- el cual aumenta de 8 a 84 en el segundo semestre, es decir, 10,5 veces. No quisiéramos afirmar que este cambio puede ser una evidencia de la tendencia política institucional de mantener en mejores

condiciones todo lo que está ubicado en la ciudad capital y sus alrededores<sup>23</sup>. Pero, es la única explicación que podemos figurarnos: esta diferencia estaría explicada por el sensible aumento de los CDP de Caracas y Miranda, 36 y en algunos casos más.

Volvamos al indicador sobre la disponibilidad de los servicios de alimentación. Del total de CDP monitoreados 215 -90%- reportan cómo se accede a la dieta alimenticia: 192 -89,3%- afirman que *los familiares llevan el alimento*; 32 además de la familia reciben donaciones de comida preparada o no perecedera de parte de organizaciones o iglesias y, solamente 3 CDP reportan que *se les brinda comida esporádicamente por parte del CDP*. Lo anterior es una violación flagrante del derecho a la salud y por ende a la vida.

Veamos algunos ejemplos. En Nueva Esparta –región insular- los familiares de los y las detenidas en tres CDP afirman que «Los privados y las privadas de libertad no consumen una dieta apropiada, por lo que se podría decir que la mayoría está mal nutrida». Esto también es frecuente en los CDP del Distrito Capital.

El siguiente es otro ejemplo, que ilustra claramente la violación de los derechos humanos en los Centros de Detención Preventiva. Este sucede en el CDP del Municipio Colón del estado Zulia:

Las más afectadas por la poca alimentación son las mujeres. Mhonica explica que de las 83 reclusas, al menos 60 son foráneas, unas de Caracas, Portuguesa, Barinas, Ciudad Bolívar, Nueva Esparta, Guayana, Yaracuy, Carabobo. “Vivimos de lo que nos dan otros pabellones”. Ella es pareja del *pram* de uno de los tres pabellones de hombres. Y a través de él ha logrado pintar un área del pabellón y garantizar una comida diaria para unas 20 internas. “Aquí pasamos hambre. Cuando la familia no viene, nos ayuda con transferencias de saldo a teléfonos, eso lo cambiamos por comida. Pero al dueño del celular siempre le queda un porcentaje y eso resta”.

El ejemplo anterior nos enfrenta nuevamente a una realidad crítica que está sucediendo en el país, no sólo en los CDP sino también en cárceles o prisiones. Muchas de las personas detenidas –hombres y mujeres- son llevadas a ciudades o

---

<sup>23</sup> Por esto en el interior del país se habla de la “burbuja” cuando se refieren a las condiciones de los servicios en la ciudad capital y sus alrededores.

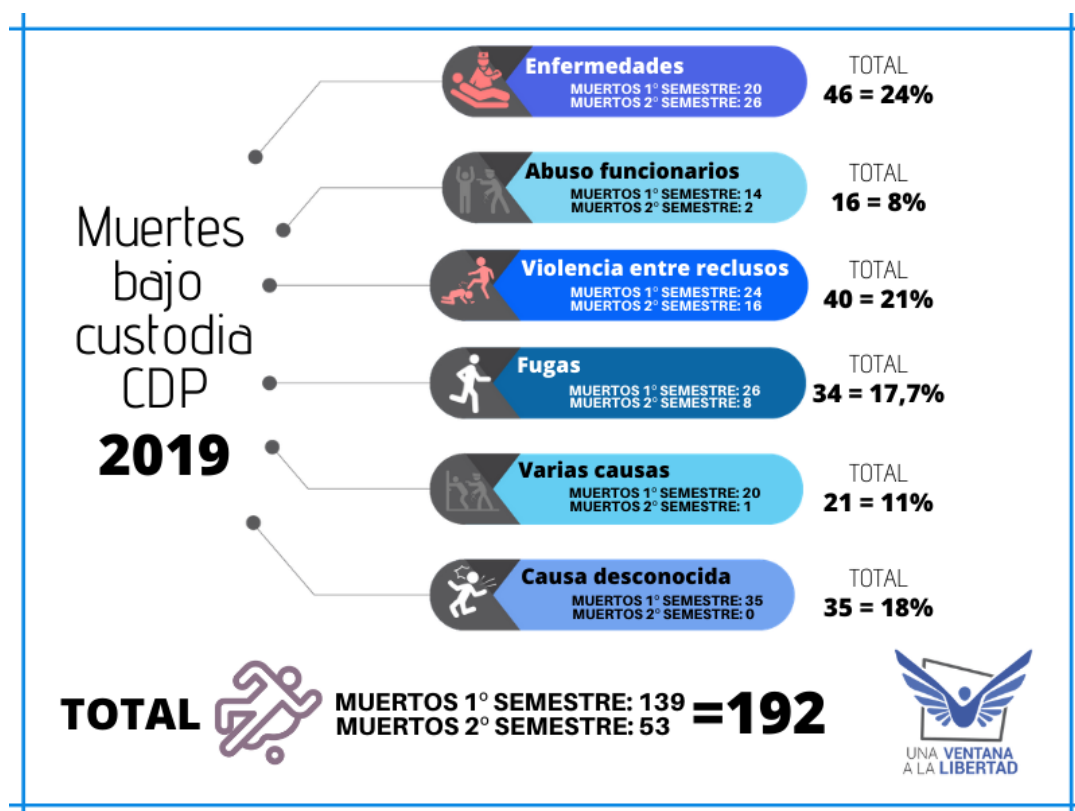
estados distintos a donde vive su familia, o en donde fueron detenidos por protestar o cometer infracciones a la ley. Lógicamente tenemos que preguntarnos: ¿quién se ocupa de su alimentación y medicamentos, cuando el Estado venezolano a través del Ministerio para el Servicio Penitenciario, ente competente en el tema que desarrollamos en este informe, insiste en que no es su problema y sólo reacciona ante presiones muy fuertes y públicas como las protestas de los detenidos en sus propios CDP?

El otro indicador directamente relacionado con el anterior es el *acceso a tratamientos y medicamentos* de suma importancia para el derecho fundamental a la vida. Durante el segundo semestre 201 Centros de Detención Preventiva – 84,1%- reportaron la forma de acceso a los tratamientos y medicamentos. Como era de esperar, 189 -94%- acceden a los mismos a través de los *familiares*. Además, algunos de los calabozos (28 o 13,9) también reciben *donaciones* de parte de las iglesias, ONG's y otras organizaciones. Solamente 12 de los CDP monitoreados -6%- reportan que los medicamentos son otorgados por *entes competentes en salud*. Esta situación es claramente expresada por nuestra investigadora en el estado Zulia.

Los enfermos no tienen un espacio para recuperarse. Existe área de enfermería, pero desde hace meses no llega personal. Las jornadas de salud son esporádicas y no incluyen a toda la población ni cubre todas las patologías. Los controles médicos deben agilizarse a través de los tribunales. El 40% de los reclusos son foráneos y no asisten al médico por no tener un familiar que le agilice su traslado al Hospital General de Santa Bárbara o al Centro de Diagnóstico Integral.

Es decir, que los detenidos que no tienen el recurso familiar para sobrevivir, o mueren de hambre o por falta de medicamentos o tratamientos.

# MUERTES BAJO CUSTODIA EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN PREVENTIVA



Hemos dejado este punto fundamental del análisis para el final, con el objeto de que al integrar la información presentada hasta ahora, podamos tener una visión más completa de la situación de violación de los derechos fundamentales de las personas detenidas en los calabozos o Centros de Detención Preventiva en Venezuela.



La primera reflexión que nos viene a la mente es que la vida de los detenidos parece no valer nada para quienes están en el gobierno y para la ministra correspondiente. Fueron 192 personas registradas en el monitoreo que perdieron la vida por diversas causas, todas evitables si el sistema funcionara y valorara que quienes están detenidos son seres humanos, razón por la cual tienen todos los derechos que les consagra la Constitución de la República de Venezuela y las leyes.

Toda persona que está sometida a las condiciones en que se encuentran los calabozos en Venezuela hoy, lo menos que puede esperar es justicia. El acceso a la misma está vetado para la gran mayoría pues el debido proceso no se aplica como evidenciamos en nuestros trabajos anteriores y en el presente. ¿Qué otra cosa puede significar que se registren 46 muertes durante el año de personas detenidas por enfermedades, las cuales todas son tratables y casi todas curables? La impunidad es total; sea cual sea la causa el Estado no sanciona a los detenidos en el plazo correspondiente y genera un hacinamiento en lugares sumamente pequeños facilitando así la violencia entre reclusos que es causante de 40 fallecimientos, la segunda causa de muerte en los CDP. A su vez, la fuga se convierten en una opción para sobrevivir, lo cual logra la mayoría de los fugados; sólo 34 fallecen en el intento, la gran mayoría de ellos son asesinados durante el proceso de recapturas. Esto está muy asociado a la violencia de los funcionarios ya sea en celdas de aislamiento o castigo, en las cuales se tortura a los detenidos siendo la causa de la muerte de 16 de ellos durante el año que concluyó.

Otra causa de muerte son aquellas que se producen por violencia entre los detenidos y por abuso de los funcionarios de custodia. Veamos la información obtenida al respecto. Sólo 23 CDP reportan muertos o lesionados por violencia entre detenidos: 16 fallecidos y 81 lesionados, de ellos 8 -53%- en riñas. Uno de los fallecidos fue degollado. Veamos un ejemplo:

El segundo trimestre de 2019 fue uno de los más violentos en el retén de Colón. Siendo el 16 de noviembre el día más sangriento. En la madrugada hubo cambio de liderazgo en el pabellón B. Con objetos contundentes (palos y tubos) y cuchillos

asesinaron a uno de los líderes. Tanto al occiso, Wuilimber José Ferrer Delgado (25), como a los cinco sobrevivientes, Rafael Ángel Fuentes Rodríguez, Adinson Jesús Chirinos Suarez, Luis Alejandro Bracho Prieto, Omar Navarro Soto y Reiner Briceño les diagnosticaron heridas cortantes por armas blancas en cuero cabelludo, el rostro, el pecho y las extremidades. Todos permanecieron horas en el pasillo del pabellón por falta de patrulla y de ambulancia para su traslado al Hospital de Santa Bárbara del Zulia. Luego de que curaran sus heridas regresaron al mismo pabellón<sup>24</sup>.

Durante el primer semestre se reportaron 24 muertes por violencia entre reclusos, lo cual significa que los muertos en este indicador fueron 40 durante el año 2019. Esta situación es sumamente grave porque habla de la falta de condiciones de seguridad dentro de los calabozos lo cual no sólo tiene relación con el hacinamiento, sino también, con la presencia de *pranes* o detenidos que ejercen el poder impunemente en los CDP y con consentimiento de los guardias. También nos refleja la falta de organización interna, la separación de los detenidos dentro de la sede a fin de evitar la convivencia forzosa de personas de diferente nivel de peligrosidad, motivo de detención o antecedentes delictivos. También debemos agregar, la falta de capacitación del personal de custodia y de planes para evitar la violencia interna.

Pero no sólo mueren por violencia entre los detenidos, también quedan lesionados y sin acceso a servicios de salud oportunos. Por lo general son llevados a un centro de salud cercano y regresados al CDP sin poder continuar ningún tratamiento. Un dato preocupante es que durante el segundo semestre 58 – 75%- de los lesionados ocurrieron en dos estados: en Táchira –estado en la frontera con Colombia- 33 (45,8%) lesionados y en Lara 25 (el 35%). Sumados los 77 lesionados del segundo semestre a los 50 lesionados del primer semestre nos da un total de 127 lesionados por violencia entre los detenidos y reclusos en los CDP. Esta cifra, sumada a la anterior de las muertes por violencia entre reclusos nos habla de recintos altamente peligrosos.

Lo anterior también se relaciona con la violencia que ejercen los funcionarios dentro de los calabozos. Sin embargo esta información es muy difícil de obtener; sólo hay

---

<sup>24</sup> Texto elaborado por la investigadora del estado Zulia.

1 caso reportado como muerte por tortura en el segundo semestre y 1 por abuso de funcionario. En este último indicador hubo 14 durante el primer semestre, 16 en total. Por otro lado, en las causas que motivan las fugas aparece abuso de funcionarios con una frecuencia de 8 casos, lo cual refuerza nuestra observación del silencio que rodea estos hechos, en especial si recordamos que los **Alertas** nos presentaron un alto número de torturados y torturadas.

Veamos un ejemplo que sucedió en Nueva Esparta y que nos reporta en el monitoreo nuestro investigador.

Una situación irregular se presentó el 17 de noviembre cuando dos reclusas estaban fuera de su celda ya que estaban siendo atendidas por molestias de salud. Los funcionarios del Dcrym que hacen recorridos por los CDP las encontraron fuera y les pidieron retornar, pero estas se negaron por sentirse mal. Los efectivos dispararon perdigones en sus piernas para obligarlas a regresar a las celdas.

Pasemos ahora a lo relacionado a las fugas, puesto que es una de las causas de muerte de detenidos. Durante el primer semestre del año murieron 26 detenidos lo cual alcanzó al 7% del total de fallecidos bajo custodia. Durante el segundo semestre, sólo reportan 8 (15%) lo cual hace un total de 34 casos, 2 de ellos en el estado Zulia. Veamos un ejemplo:

En el motín del 24 de diciembre se fugaron 5 detenidos del Retén de Cabimas. En el alboroto, la ausencia de funcionarios de custodia interna y externa cinco reclusos aprovecharon la revuelta y se escaparon. En la mañana, los funcionarios del Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (CONAS) activó una operación por la avenida Intercomunal y sus adyacencias... Recapturaron a cuatro de los evadidos y liquidaron a uno<sup>25</sup>.

En 4 estados monitoreados no se reportaron fugas (lo cual no quiere decir que no las hubo); 45 CDP en el resto de los estados monitoreados reportaron 49 fugas de detenidos, siendo la causa principal el hacinamiento, es decir 35 o 71%. En 2º

---

<sup>25</sup>Alerta Zulia: cinco muertos, una herida y cinco evadidos terminó balacera en el retén de Cabimas. UVAL. 24-12-2019

lugar están los abusos de funcionarios 8 o 6%; por motines o protestas 7 (14%) y por fallas en la infraestructura de los CDP 6 (12%).

Recordemos que para finales del año encontramos 19.208 detenidos, pero solamente en 38 CDP pudimos obtener información sobre procesados y sentenciados. Sólo se conoció de la presencia de 3.370 detenidos de los cuales el 93,8%, se encontraban procesados lo cual implica que gozan de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, el Ministerio usa estos calabozos o Centros de Detención Preventiva como prisiones o cárceles y los obliga a sobrevivir, en algunos casos hasta 5 o 7 años, en espera de una decisión de su proceso y una sentencia que no dudamos en muchos casos pueda ser menor al tiempo transcurrido en el calabozo, o simplemente un traslado. Pero muchos de las y los detenidos no sobreviven esa espera y mueren por diversas causas durante su permanencia en los CDP, como observamos en el cuadro anterior.

Un comentario final sobre un tema poco escuchado: las diferentes formas de protesta de los y las detenidas, en las cuales podríamos leer que es necesario mejorar las condiciones internas para evitar más lesionados y muertos. En nuestro monitoreo del segundo semestre se registraron 52 protestas de reclusos por diversas causas, siendo las más frecuentes en los CDP de Anzoátegui y Lara (10 en cada uno de ellos). En mayor proporción fueron *protestas a gritos* en un 48%. En segundo lugar se presentaron las *huelgas de hambre* con un 38,5%; y en tercer lugar los motines con un 19%. Estas protestas se suman a las 56 del primer semestre haciendo un total de 108 protestas durante el año. No lo dudemos, las protestas aun cuando pueden ser muy violentas son un grito de auxilio, pidiendo que volvamos la mirada a lo que puede estar sucediendo en las terribles condiciones de sobrevivencia en la cual permanecen las personas detenidas.



# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es problemático resumir lo dicho en este informe en una palabra. Quizás drama, terror, tragedia, cualquiera podría ser, y aún quedarse corta. No podemos dejar de pensar que la situación de sobrevivencia en los Centros de Detención Preventiva en Venezuela forma parte de la violencia psicológica, física, económica y política que vivimos en nuestro país. Casi que el mensaje es: si te descuidas vas a parar allá, y de allí sales muerto o a morir.

El suplicio que es sobrevivir, día a día, viviendo en las condiciones aquí detalladas es una flagrante violación de los derechos humanos fundamentales de las personas –mujeres, hombres, adolescentes de ambos sexos, personas de la comunidad LGBTI, indígenas- son iguales en su condición de minusvalía al entrar a uno de ellos.

Hacer visible siempre que podamos esta realidad por todas las vías posibles, es un compromiso para **UVAL** y, así lo asumimos todos y todas las personas que formamos parte de este equipo. Este es un compromiso permanente que como organización de la sociedad civil honramos desde hace varios años.

Esta experiencia nos permite repetir, que el uso político de los CDP que se hizo de manera evidente durante el primer semestre del año 2019, al someter un alto número de personas a detención arbitraria sólo por levantar su voz de protesta social o política, potenció el hacinamiento y profundizó el deterioro de las condiciones de sobrevivencia dentro de los mismos. Hay que permanecer siempre Alerta ante esta situación. Pudimos observar que durante estos meses de mayor hacinamiento se presentaron muchas fugas, las cuales a pesar de la represión siguen siendo un riesgo calculado para las personas detenidas, ya que aproximadamente, sólo un 30% de los fugados son recapturados, y pocos mueren en el intento.

La vinculación del hacinamiento con el permanente deterioro de la calidad de vida y la salud de las y los detenidos es inocultable. Pero, aún si los calabozos no estuvieran hacinados circunstancialmente según el ritmo de las protestas políticas y sociales, el sólo hecho de no respetar el debido proceso genera un hacinamiento grave. Este es un problema central que a pesar de los mandatos internacionales y las leyes

venezolanas, no ha habido forma de que sea seriamente enfrentado por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, a quien corresponde esta responsabilidad. Respuestas esporádicas y publicitarias no resuelven el problema; hay que seguir exigiendo responsablemente que se planifiquen políticas públicas que den respuesta al problema. No pueden seguir conviviendo más de mil personas detenidas en un espacio que fue diseñado sólo para 100 y de corta permanencia.

Otra conclusión es el estado de deterioro y desatención de la salud de las mujeres detenidas, estén o no embarazadas. No tienen derecho a la vida sexual pero se embarazan lo cual llevó a una de ellas a decir que no sabía quién era el padre si un detenido o un guardia. Profundizar en las condiciones de las mujeres y jóvenes adolescentes es un compromiso del equipo de investigación de UVAL.

Asimismo, el silencio rodea las condiciones de detención de las personas de la comunidad LGBTI. En muchos casos, prefieren guardar silencio y ocultar su identidad sexual a fin de evitar mayor violencia. Esta realidad hace difícil acceder a la información particular de estas personas.

No hemos podido profundizar en los casos de la población indígena por las difíciles condiciones de traslado por la distancia, condiciones de la vía y costos de movilización hacia las regiones de las comunidades indígenas donde se encuentran, detenidos y detenidas en los calabozos. A pesar de ello hacemos el esfuerzo a través de vías alternativas a fin de conseguir la información. Toda persona que está detenida o presa en los calabozos es de nuestro interés en igualdad de condiciones.

Un elemento muy problemático y que le damos seguimiento permanente son las graves consecuencias que tiene su reclusión para la familia de las personas detenidas. Si alguna persona integrante de cada grupo familiar no asume la tarea de facilitar insumos alimenticios, o en su defecto la diaria alimentación de su familiar detenido, la desnutrición y hasta la muerte es lo esperado. Quienes asumen esta tarea día a día, en su casi totalidad son mujeres, algunas de ellas de una tercera edad prolongada. Si la persona detenida es trasladada a otro calabozo lejos de la

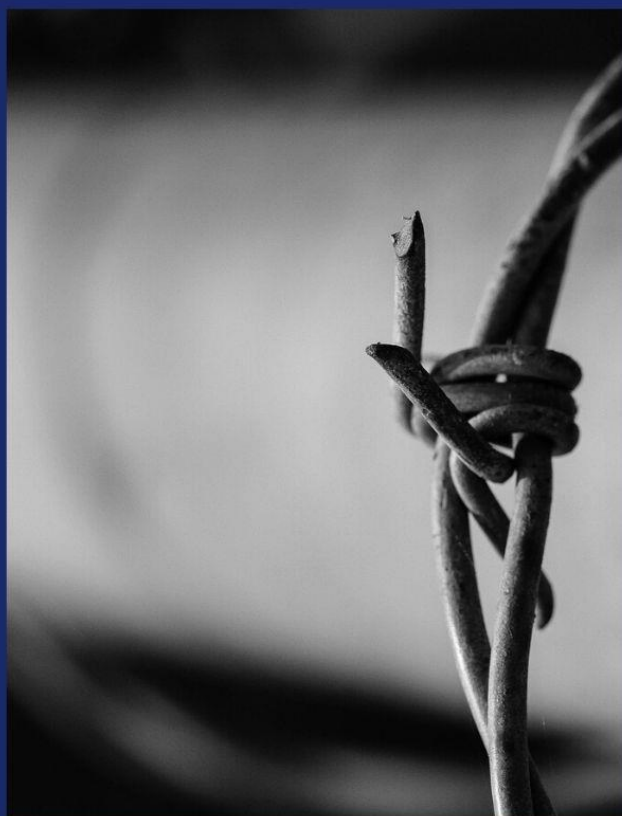
familia, si no sale pronto no lo hará vivo. Igualmente sucede con los medicamentos, su acceso depende de la familia, y muchas veces no son entregados a los detenidos. La visita, la comida diaria entregada para las y los detenidos junto con los medicamentos, no siempre llega a su destino: se cobra vacuna para poder “garantizar” que serán entregados a la persona indicada, independientemente del importe pagado –a veces en especies- como *vacuna*. Podemos preguntarnos, ¿de dónde sale el dinero para poder alimentar a una familia incluyendo a la persona detenida en las condiciones de escases y pobreza extrema de hoy? Esta situación tiene que ser atendida por los entes correspondientes independientemente de la crisis que vive el país, y nosotros como organización de la sociedad civil lo seguiremos exigiendo.

También seguiremos denunciando no solo la falta de alimentación y medicamentos, sino, además, el acceso a la atención médica oportuna a fin de disminuir las enfermedades y las muertes dentro de los CDP. Mandar a alguien a su casa o a un hospital para que muera afuera, no disminuye el hecho de que es una muerte bajo custodia de una persona privada de libertad, lo cual, hace que esa muerte sea consecuencia de la acción u omisión del único responsable de las vidas de estas personas: el Estado venezolano representado por la institución gubernamental correspondiente, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.



UNA VENTANA A LA LIBERTAD

---



© Una Ventana a la Libertad 2020

Caracas - Venezuela

Teléfono: 0412-9762935



@ventana  
libertad



Una Ventana  
a la Libertad



@ventana  
libertad



Una Ventana  
a la Libertad



[unaventanaalalibertad.org](http://unaventanaalalibertad.org)

Contribuimos con la humanización de los recintos carcelarios